

3.5. Análisis de expedientes.

Actualmente las mujeres en las diferentes entidades del país sufren una violación sistemática a sus derechos humanos que obedece entre otras causas; a patrones culturales, ideológicos y sociales que de manera negativa reivindicán la violencia y discriminación en su contra. Asimismo, dichas trasgresiones impiden el avance significativo de sus oportunidades, no obstante que de manera formal ya se encuentran reconocidos un conjunto de derechos y libertades contenidas en distintos instrumentos legales tanto nacionales (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1 y 4, así como Códigos Locales y Leyes Reglamentarias) e Internacionales (Convención CEDAW, Belem do Pará y Pacto de San José) pero que todavía existen diversos obstáculos que impiden que se concreten en las Leyes Locales y en la realidad, que permitan modificar de manera tangible sus actuales condiciones de vida.

Ante este contexto el objetivo fundamental del presente diagnóstico ha sido ubicar las principales fallas en el sistema de procuración e impartición de justicia en las Entidades Federativas que forman parte del presente estudio, a partir de un análisis técnico-jurídico de los expedientes judiciales. Además, de las fallas meramente jurídicas en las actuaciones ministeriales y judiciales, nuestro objetivo es reflejar y evaluar con base en los indicadores objetivos el nivel de cumplimiento de respeto a los derechos humanos de las mujeres por parte del Ministerio Público y de los tribunales.

Ante las referidas consideraciones se seleccionó para el presente estudio distintos tipos de delitos que de manera significativa reflejan el fenómeno social de la violencia hacia las mujeres y que son en mayor grado: homicidio, violación, violencia familiar, abuso sexual e incumplimiento de deberes alimentarios. Dichas causas penales representan distintas formas de violencia en contra de las mujeres, por ejemplo respecto a su vida en los casos de homicidio, respeto a su libertad sexual en los casos de violación y abuso sexual, respeto a su integridad familiar, física y psicológica en los casos de violencia familiar y respeto a su libertad económica (violencia económica) en los casos de incumplimiento de deberes alimentarios.

La muestra de expedientes seleccionada para el análisis tiene un 95% de confiabilidad lo que garantiza que la validez del resultado del análisis. Los juzgados que fueron seleccionados cubren tanto el área rural como urbana.

El análisis de expedientes ha sido realizado con el propósito de determinar la calidad de las actuaciones dentro de un proceso penal que abarca el trabajo de todas/os las/los servidoras/es públicas/os que intervienen en dicho proceso, es decir las y los policías, las y los Agentes del Ministerio Público, Jueces, Juezas y personal de los Juzgados así como Magistradas/os, también el estudio analiza las actuaciones de las y los Jueces y Magistradas/os Federales en los casos en que se haya promovido un Juicio de amparo bien sea directo o indirecto.

Es de subrayarse que el presente estudio diagnóstico tiene una gama de resultados, uno de ellos es el análisis de expedientes que señala todas y cada una de las

deficiencias de lo actuado por los funcionarias/os anteriormente mencionadas/os dentro de una muestra estadísticamente representativa.

Lo anterior se realiza con el fin de identificar las áreas deficientes que necesitan una mejora a través de capacitación específica, cambio de prácticas y hasta reformas legales. Para cumplir dichas metas se implementa un trabajo de campo donde con base en datos estadísticos así como sugerencias de los propios operadores la procuración e impartición de justicia se selecciona una muestra de casos.

Este apartado comprende las conclusiones principales que resultaron del análisis de los expedientes en las Entidades Federativas donde las autoridades locales permitieron el acceso a los mismos. Cabe señalar que el acceso a los expedientes ha sido un punto muy problemático para la implementación del presente estudio y tuvimos que superar distintos obstáculos para que finalmente los equipos locales pudieran analizar las causas seleccionadas con base en los criterios técnico-estadísticos. Este problema refleja poca transparencia y tolerancia por parte de las autoridades locales para las evaluaciones externas realizadas por la sociedad civil a solicitud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Además, los expedientes que formaron parte del estudio no representaban ninguna consecuencia jurídica, ya que uno de los criterios de la selección, además de los estadísticos y de alta complejidad, era conclusión definitiva del asunto, es decir los expedientes a los que tuvimos acceso se encontraban en la fase de ejecución de sentencia o la sentencia ya ha sido ejecutada.

A continuación presentaremos los resultados más relevantes que se obtuvieron del análisis de los expedientes, comparando el nivel de cumplimiento de las normas legales en las Entidades Federativas.

En México, como en otros países que pertenecen al sistema del derecho continental, no existen criterios específicos de razonabilidad en la actuación de las/los funcionarias/os públicos y oficiales encargados de aplicar la ley. Lo que funciona como criterio real de control de la argumentación judicial y administrativa es el principio de fundamentación y motivación al que toda/o funcionaria/o pública/o, incluyendo todo el sistema de justicia penal, está obligado. En efecto, el Artículo 16 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Fundar significa determinar la capacidad legal de la autoridad para emitir el acto, y tiene relación con la regla secundaria de adjudicación a la que se refiere Hart en “el concepto de derecho”.²⁰ Pero también se refiere a determinar legalmente la materialidad del acto. Motivar por escrito, como está contenido en el Artículo, significa argumentar el por qué el acto que se realiza cae en un supuesto normativo.

²⁰ Hart. H.L.A., *El concepto de derecho*, (trad. de Genaro R. Carrió), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963.

Es un ejercicio de dar razones y argumentar.

A diferencia del procedimiento del derecho común no existen en el derecho mexicano niveles de estándares de la argumentación. Una buena motivación es al mismo tiempo un criterio interno, desde la perspectiva de Hart, ya que tiene que verse desde una perspectiva intra sistemática, para la persona que lo emite, y desde una perspectiva externa forma parte del proceso de revisión de la decisión, porque es juzgado por el superior de quien lo emite o la autoridad judicial, paradójicamente, a veces, sin necesariamente dar razones. Es de hacerse notar que es la principal causa por la que se conceden amparos. Este remedio constitucional es usado y abusado, porque se encuentra en la obligación de motivar y fundamentar, así como la aplicación del principio de legalidad.

Dicha obligación, establecida en el Artículo 16 de la Constitución Federal, para todas las autoridades respecto de la fundamentación y motivación de todas sus decisiones que afectan los derechos de las y los justiciables, supone en principio que la autoridad no sólo sabe que debe hacerlo, sino que sabe cómo hacerlo, sin embargo, esto no ocurre en la justicia penal, como hemos podido constatar a través del análisis de los expedientes, así como de las percepciones.

A través del análisis de los expedientes se demostró que los juzgados sufren de niveles bajos de motivación de sus decisiones, lo que no solamente genera una recursividad excesiva, sino también contribuye a la violación de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la falta de motivación de los elementos del cuerpo de delito implica que a la víctima se le obstaculiza al acceso a la justicia por reposiciones de los actos procesales; además, la falta de motivación respecto a la reparación del daño material deja a la víctima sin posibilidades de restituir el derecho violado, inclusive asistencia médica, psicológica o de cualquier otra índole, y la falta de motivación respecto a la reparación del daño moral implica una discriminación de la reputación y el estado anímico de la misma. Todo lo anterior, no solamente incumple con el mandato constitucional establecido en el Artículo 16, sino también en los Artículos 1 que se refiere a la prohibición de discriminación y el Artículo 4 que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres.

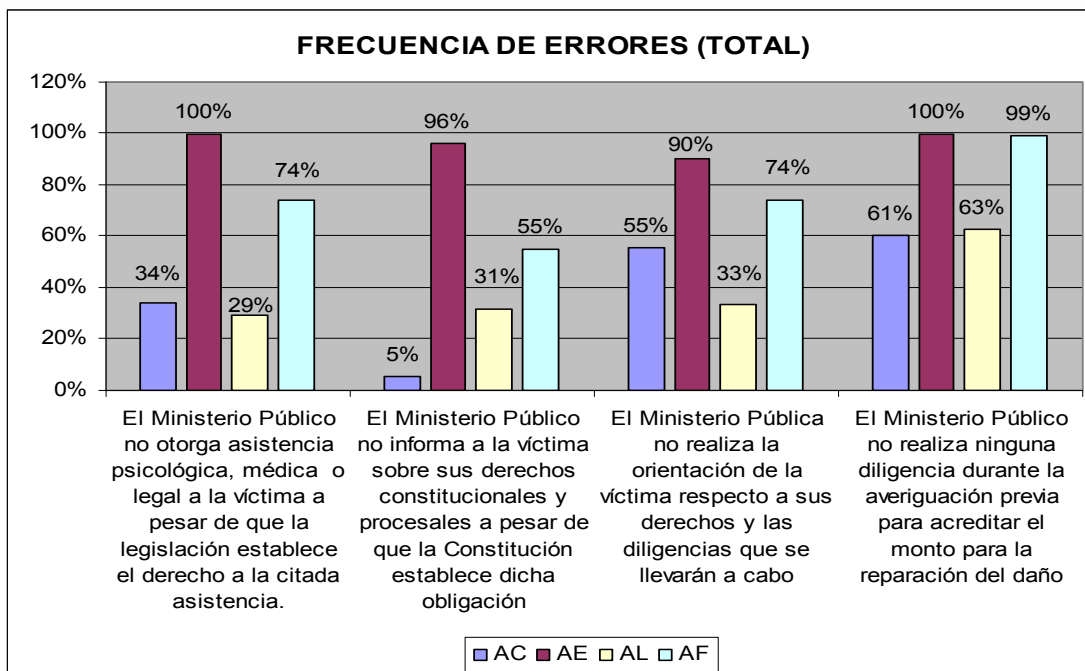
La siguiente gráfica es el resultado del análisis de las actuaciones del Ministerio Público a la luz de los derechos de la víctima, tales como: el derecho a la asistencia médica, psicológica, jurídica; el derecho a ser informado sobre sus derechos constitucionales y procesales; el derecho a la orientación sobre las etapas procesales y el derecho a la reparación del daño. Las deficiencias señaladas a continuación que hemos encontrado a través del análisis de los expedientes demuestran cómo la discriminación hacia las mujeres obstaculiza el cumplimiento de sus derechos cuando es víctima de un delito y contradice lo establecido en los Artículos 1º y 4º. Constitucional (Derecho a la no discriminación y Derecho a la igualdad), así como por las normas internacionales, inclusive el Pacto de San José, la CEDAW y Belém do Pará.

Respecto a las frecuencias de las deficiencias en las actuaciones del Ministerio Público cabe mencionar que en el 34% de los expedientes analizados en AC el Ministerio Público no otorga asistencia psicológica, médica o legal a la víctima a pesar de que la legislación establece el derecho a la citada asistencia, en AE es el 100% de los expedientes, en AL es 29% y en AF es el 74%, lo anterior es extremadamente grave, ya que en el presente estudio se analizaron causas penales iniciadas por los delitos de homicidio, violación, violencia familiar, abuso sexual e incumplimiento de deberes alimentarios, donde la asistencia es indispensable para proteger los derechos de las mujeres.

Respecto de la información de la víctima sobre sus derechos constitucionales y procesales identificamos en AC tan sólo en el 6% de los casos analizados está obligación se incumple, mientras que en AE es en el 96% de los casos, en AL en el 31% y en AF en el 55% de los asuntos revisados; lo anterior deja a la víctima en un estado de indefensión, donde la autoridad la ignora, lo que en otras palabras constituye una forma de discriminación, en los términos de las Convenciones de CEDAW y Belém Do Pará.

También, analizamos si el Ministerio Público orienta a la víctima respecto de sus derechos, las diligencias y las etapas procesales, de lo que resultó que en 55% de los casos estudiados en AC el Ministerio Público no realiza la citada función, en AE es en el 90% de los asuntos, en AL en el 33% y en AF en el 74%; de igual forma es una grave violación de los derechos de las víctimas y el incumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por México.

Por último, nos referimos en la siguiente gráfica a la realización de las diligencias durante la investigación para acreditar el monto de reparación del daño, y obtuvimos que en el 61% de los casos de AC el Ministerio Público no realiza ninguna diligencia durante la averiguación previa para acreditar el monto para la reparación del daño, el AE es el 100%, en AL es el 63% y en AF es el 99%; lo que nos permite concluir que la reparación del daño queda fuera de cualquier preocupación del Ministerio Público y la víctima sufre una discriminación y lo único que le queda es por su propia cuenta obtener los elementos probatorios para demostrar la reparación del daño, lo que en consecuencia es ni más, ni menos, una violación al derecho de acceso efectivo a la justicia.

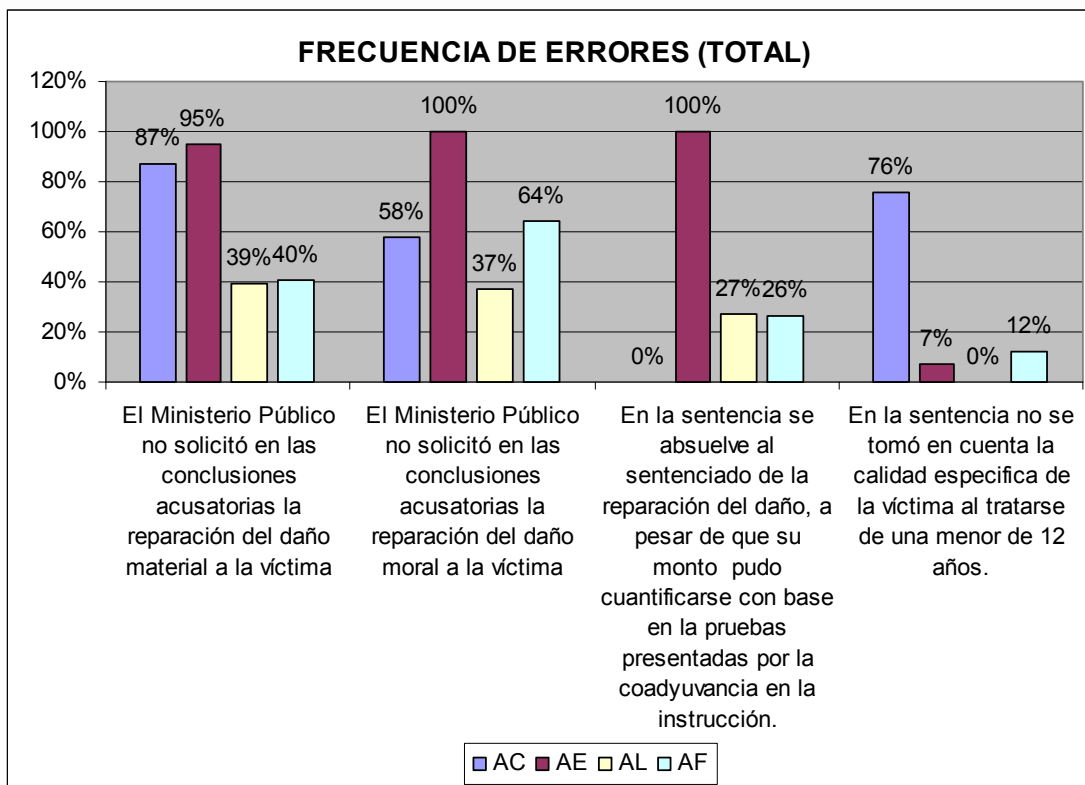


La siguiente gráfica nuevamente se refiere a la reparación del daño, así como a las calidades específicas de la víctima; lo último es muy importante al momento de calificar la conducta pues la sanción puede variar en función de quién es la víctima, así como podría variar el delito, al existir presunciones legales que podrían hacer la diferencia entre un acto sexual consensuado y una violación equiparada, lo que en su caso es una clara manifestación de discriminación hacia las mujeres.

De acuerdo con los datos obtenidos, en 87% de los casos analizados en AC el Ministerio Público no solicitó en sus conclusiones la reparación del daño material; mientras que en AE ocurrió en el 85% de los casos estudiados; en AL en el 39%; y en AF, en el 40%; mientras que referente a la solicitud de reparación del daño moral –aún cuando existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto-, en 58% de los casos analizados en AC el Ministerio Público no la solicitó; en AE no se solicitó en el 100% de los casos, en AL en el 37% y en AF en el 64%.

También se encontraron casos en los que el juzgado absolvió de la reparación del daño a pesar de que su monto pudo cuantificarse con base en las pruebas presentadas por la coadyuvancia en la instrucción, este problema es particularmente grave en el AE, donde en el 100% de los casos analizados se encontró dicha deficiencia, disminuye la cifra en AL y en AF (27% y 26%, respectivamente) y en AC no se identificó ese problema.

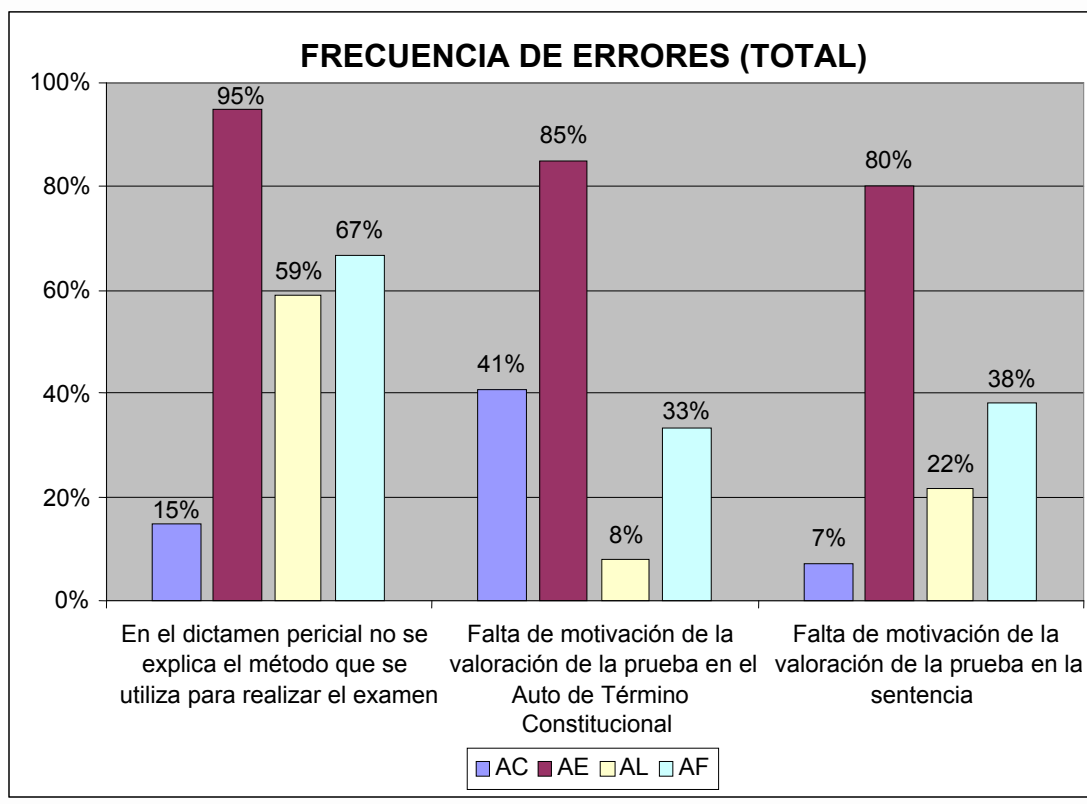
Por último, respecto a la calidad de la víctima, en el 76% de los expedientes analizados en AC la sentencia no toma en cuenta la calidad específica de la víctima, por ejemplo, ser menor de 12 años de edad, en AE y en AF este problema es poco frecuente, es decir corresponde al 7% y 12%, respectivamente, y en AL se encontró ningún caso con el citado error.



La última gráfica comparativa se refiere a la prueba y su valoración, particularmente respecto a la prueba pericial, cuya relevancia es indiscutible para los casos de homicidio, violación y el abuso sexual. La gráfica muestra que en 15% de los expedientes de AC en el dictamen pericial no se explica el método que se utiliza para realizar el exámen, en el AE en 95% de los casos, en AL 59% y en AF 67%; lo anterior implica la invalidez de la prueba y en consecuencia perjudica la impartición de justicia e impide a la víctima, en su mayoría mujeres y niñas, a garantizarles el acceso efectivo a la justicia.

Por otra parte, en relación con la valoración de la prueba tenemos que en 41% de los casos revisados en AC hay una falta de motivación de la valoración de la prueba en el auto de término constitucional, en AE esto se da en 85% de los casos, en AL en el 8% y en AF en el 33%; esto impacta en el caso de una apelación o amparo pues implica una reposición del acto procesal y en consecuencia genera gran recursividad y coloca la víctima frente a una justicia ineficiente.

Por último, referente la motivación de la valoración de la prueba en la sentencia de la primera instancia en el 7% de los expedientes analizados en AC no existe la motivación o es deficiente, ya que se señala solamente el valor otorgado, pero no los argumentos que sostiene dicha determinación; en el AE este problema se encontró en el 80% de los expedientes, en AL en el 22% y en AF en el 38%; todo lo anterior habla de la calidad de justicia en México.



A continuación presentaremos los resultados del análisis de los expedientes con mayor detalle.

Entidad Federativa AE

En el presente estudio, el análisis de expedientes es una parte fundamental y de pleno sustento de los resultados que se desprenden de las actuaciones judiciales.

La muestra seleccionada fue calculada con el índice de 90% de confiabilidad, a partir de la totalidad de sentencias emitidas para cada uno de los delitos seleccionados y que en su gran mayoría, debido a su naturaleza, son cometidos en contra de mujeres, lo que implica una indubitable garantía respecto de la validez de los resultados.

Los delitos que en la presente investigación fueron parte de la muestra son:

- Homicidio doloso en contra de mujeres;
- Violación;
- Abuso sexual;
- Violencia familiar;
- Incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Los delitos seleccionados obedecen a una clara razón, en que en AE son los que con más frecuencia se cometen en contra de las mujeres y como el planteamiento principal de nuestra investigación es captar el nivel de aplicación y observación de las normas internacionales que protegen los derechos de las mujeres, obviamente tendríamos que recurrir a una muestra que nos proveyera de los insumos adecuados para tal fin, por lo que se decidió con base en estadísticas de delitos contra las mujeres en AE, estudiar los de mayor frecuencia y daño para las mismas.

En cuestión cuantitativa, se analizaron 44 expedientes por delito de Homicidio calificado, 43 expedientes de violación, 109 expedientes de abuso sexual, 16 expedientes de violencia familiar y 8 expedientes de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Los documentos analizados obedecieron varios criterios de selección, además de los referidos en párrafos precedentes, a saber:

- Las víctimas tenían que ser mujeres.
- Los expedientes deberían tener el estatus jurídico de cosa juzgada.
- Los expedientes deberían ser dentro de lo posible, de no más de dos años de antigüedad.
- Se tenía que respetar la confidencialidad de los datos de personas involucradas y autoridades responsables de su tramitación.

Los resultados permiten identificar los aciertos en el desempeño de los servidores públicos de procuración e impartición de justicia, así como sus errores, mismos que serán presentados en el siguiente capítulo, por etapas procesales de acuerdo con los resultados obtenidos para su mejor y práctico manejo en la información.

En el estudio realizado se encontraron deficiencias frecuentes que podemos calificar como los “*problemas principales*” o de mayor trascendencia para la resolución de los asuntos y los que no implican afectación en la misma. Los principios de los cuales se observó su respeto y cumplimiento son ejes generales de derecho como reglas procesales, mismas que los podemos clasificar como problemas en los siguientes temas:

- **ERRORES EN MOTIVACIÓN.** Refiriéndonos a la falta de argumentación y señalamiento que justifique tanto la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, como de las pruebas recabadas e inclusive datos del acta de nacimiento, del deber legal en los delitos contra la familia y de forma general el respeto a dicho principio de motivación en todos los actos de autoridad;
- **ERRORES DE FUNDAMENTACIÓN.** Se trata de errores en la aplicación de la ley en cuanto a la tipificación de la conducta, las agravantes y la forma de participación de los sujetos activos, entre otras; es decir que el fundamento legal utilizado bien sea por la/el Fiscal del Ministerio Público o la/el jueza/ez es incorrecto o carece del mismo.

- **ERRORES EN PERITAJES.** Refiriéndonos principalmente a que el formato utilizado por los peritos contiene deficiencias o no corresponde al tipo del estudio solicitado; la descripción de la metodología y técnica utilizadas no permiten determinar cómo se llega a la conclusión del dictamen respectivo, así como errores matemáticos y utilización del testimonio de la víctima como la única fuente para poder realizar el exámen pericial.
- **OMISIONES RESPECTO DE LA CONDENA EN REPARACIÓN DEL DAÑO** que se refieren principalmente a que no se presentan elementos en el pliego de consignación que permitan acreditar el monto de reparación del daño, ni se fija concretamente el monto en el momento de presentar las conclusiones de acusación tal como lo señalan el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales.
- **OMISIONES EN LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS OTORGADOS A LA VICTIMA Y EL PROCESADO.** Refiriéndose principalmente a que no se le explica la totalidad de los derechos consagrados en la Constitución y la legislación penal sustantiva y adjetiva según sea el caso, así como que no se puede determinar si se dio seguimiento a la atención psicológica a la víctima.
- **ERRORES EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.** Se refiere principalmente al momento de realizar la valoración de las probanzas no se argumenta cuál es el valor expreso que se le otorga, es decir, no se señala el valor probatorio pleno, preponderante o de indicio.

ERRORES DE MOTIVACIÓN.

En el rubro de la deficiente motivación en las actuaciones en general del Agente del Ministerio Público durante la averiguación previa, el error se presenta con una frecuencia de un 92% del total de los expedientes analizados encontramos cuando menos un error de esta naturaleza, refiriéndonos a la falta de motivación adecuada.

Para ejemplificar lo anterior, baste decir que es común encontrar la falta de motivación respecto a la acreditación debida del cuerpo del delito al no demostrar la existencia de los elementos que integran la descripción normativa de la conducta o hecho delictuoso, según lo determina la ley penal.

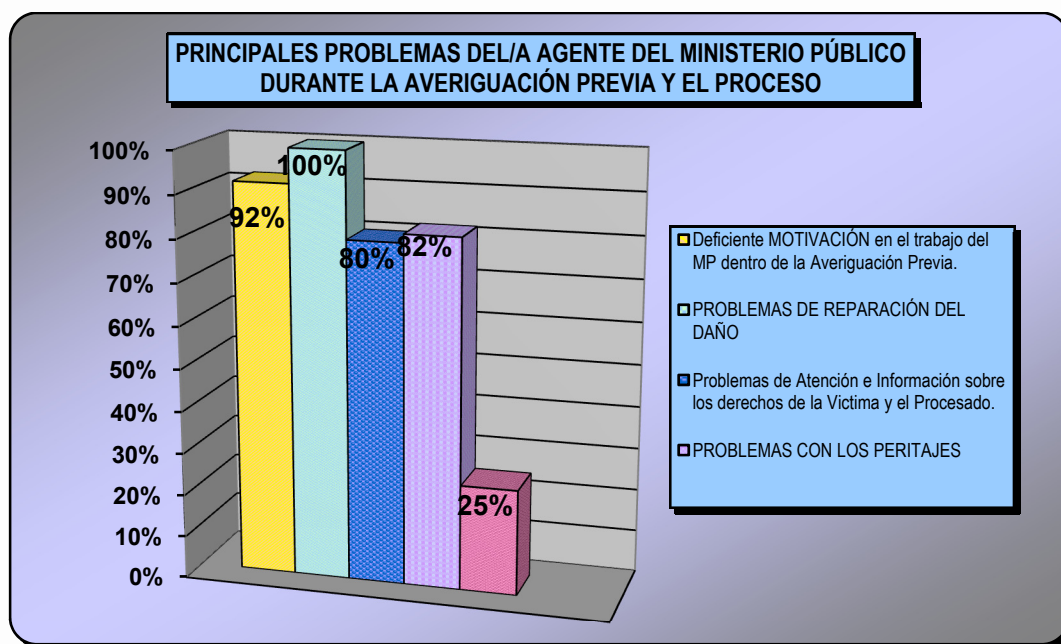
Dado que como regla general al momento de realizar el pliego de consignación, las/los Agentes del Ministerio Público no establecen claramente cuáles son los elementos del cuerpo del delito en cuestión y mucho menos el por qué son satisfechos en la causa, se limitan únicamente en la mayoría de los casos a establecer literalmente: *“ el cuerpo del delito “X” se tiene por comprobado con la acreditación del conjunto de elementos objetivos que constituyen la materialidad del hecho que la ley sentencia en términos del artículo “X”, con los siguientes medios de prueba”.....* situación que deviene en una mala práctica de las/os agentes del Ministerio Público ya que solo se limitan a transcribir

el resultado de sus diligencias probatorias y a establecer que con ello quedan acreditados los elementos del cuerpo del delito y que se realiza de forma genérica sin importar el tipo de delito que estemos estudiando.

Como podemos notar en el ejemplo anterior no existe motivación alguna por parte del Ministerio Público que acredite la satisfacción de los elementos del cuerpo del delito, situación que puede derivar en una absolución o algún otro beneficio que no debiese existir, lo que sin duda alguna repercute en la esfera jurídica de la agraviada al no tener certeza ni seguridad jurídica para la defensa de sus derechos, con lo cual sin duda alguna son dañadas las prerrogativas y los derechos que diversas normas profieren a la mujer y sobre todo violando con el error referido las garantías constitucionales consagradas en el artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en cuanto a la falta de respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y el principio de debida motivación contenido en el último numeral citado.

Otro error común es el cometido al establecer la responsabilidad penal sin haber acreditado que se aplique alguna causa excluyente de la responsabilidad, dado que solo se limita a establecer: “es penalmente responsable dado que no se acreditó durante la averiguación previa ninguna causa de litud”.... Sin establecer cuáles son esas causas ni el por qué no se acreditaron.

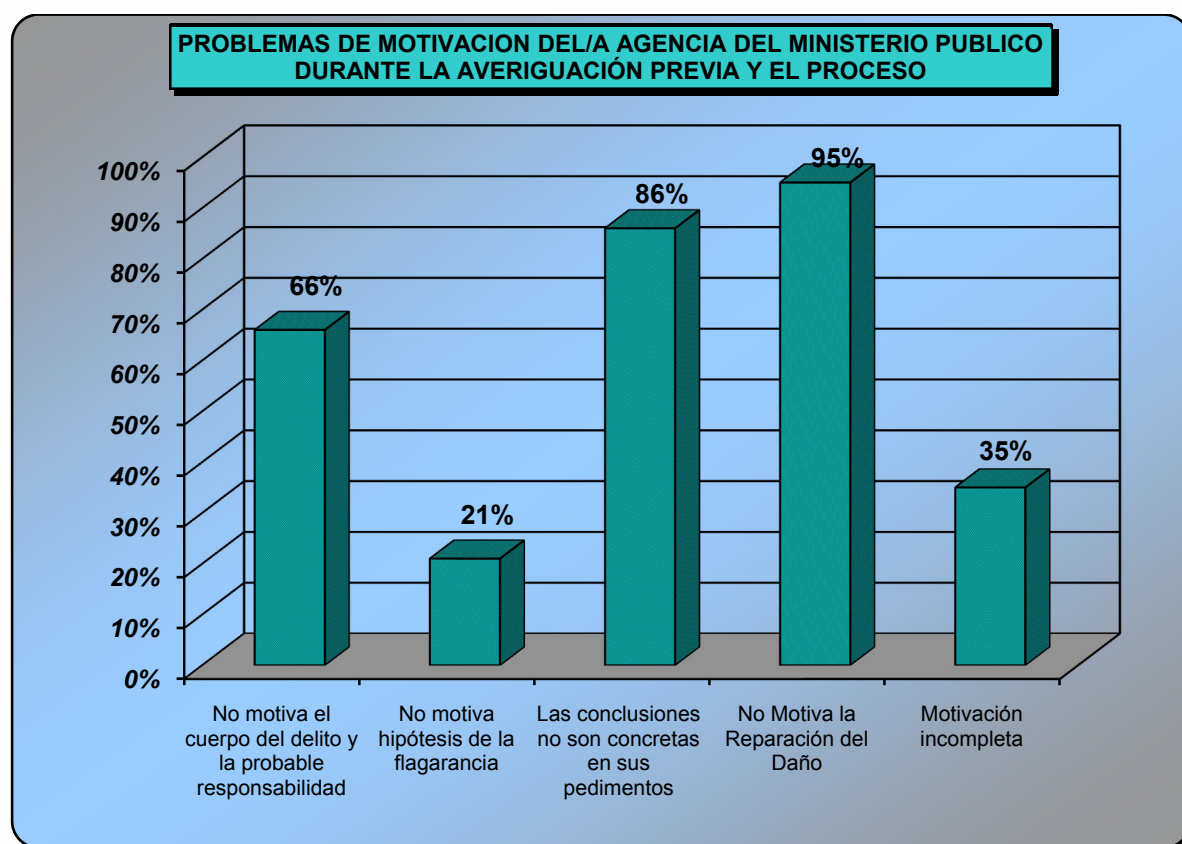
Otros resultados son establecidos y graficados en la siguiente tabla:



Como podemos observar claramente en la gráfica anterior, establecimos la frecuencia de otros errores cometidos por las Agencias del Ministerio Público en sus actuaciones durante la averiguación previa y el proceso, de donde obtuvimos que en el 92% de las

causas se comenten errores de motivación en general respecto de diversas actuaciones; en el 100% de las ocasiones encontramos problemas por cuanto hace a la reparación del daño y que, estudiaremos en párrafos más adelante en donde haremos constancia de estos problemas en dicho tema tan particular y de vital importancia para la defensa de los derechos de las víctimas de los delitos, notamos de igual forma que en el 80% de las ocasiones existen problemas con la atención y el ofrecimiento de información por parte de la autoridad a las víctimas y/o procesadas/os, dado que en ese porcentaje se dejan de informar de manera integral y completa los derechos que las diversas normas aplicables les confieren para la protección de sus intereses, problemas que de igual forma particulares no se motiva la parte de haremos más adelante igual que los ocurridos con respecto a los peritajes solicitados por las agencias del Ministerio Público.

Como porcentajes en algunos errores identificados en concreto establecidos, encontramos entre otros los que se presentan en la siguiente grafica:



Es claro y entendible que los errores encontrados respecto a la motivación que debe imperar en las actuaciones de las autoridades, afectan y repercuten en cuestiones procesales específicas y en obligaciones concretas de las agencias del Ministerio Público y sus titulares, a lo que encontramos que en el 66% de las causas existe una inadecuada motivación en los argumentos vertidos para acreditar el cuerpo del delito y la

probable responsabilidad ya que no cumplen lo establecido en el Artículo 122 del Código procesal al no satisfacer debidamente los elementos y obligaciones que establece, tal y como ejemplificamos en paginas anteriores respecto de la acreditación del cuerpo del delito.

En un 21% de las causas encontramos deficiencias en cuanto a la debida motivación referente a la hipótesis legal de la flagrancia, establecida en el Artículo 267 de la ley adjetiva aplicable, en el

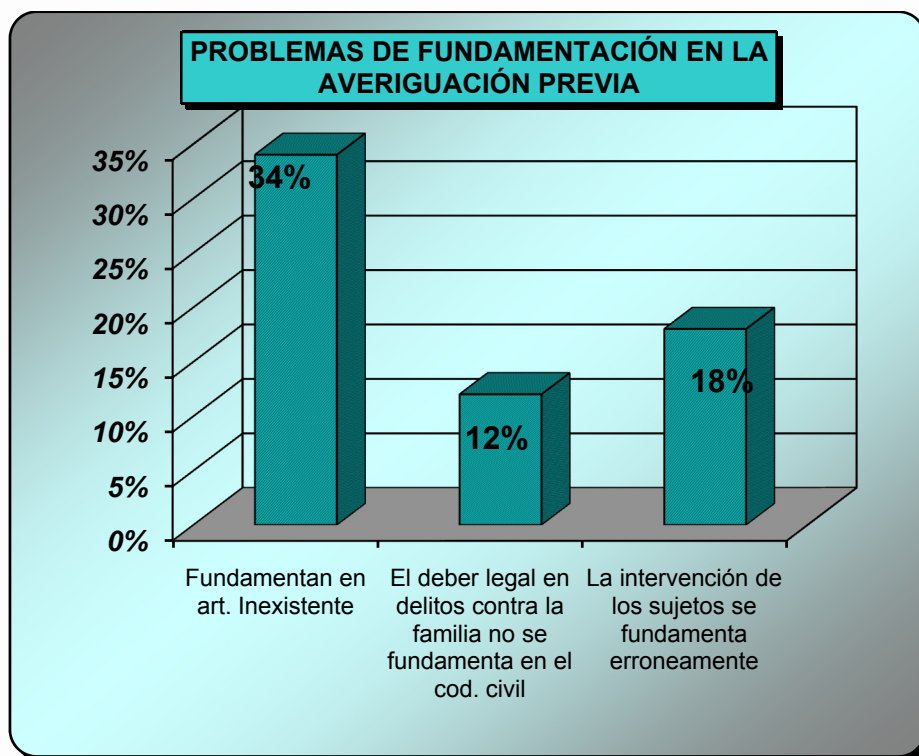
ERRORES DE FUNDAMENTACIÓN.

Respecto a la falta de fundamentación adecuada podemos establecer como frecuencia de este error que en las actuaciones del Agente del Ministerio Público, en los expedientes revisados en un 45% de ellos encontramos errores de este tipo, sobre todo por la costumbre de utilizar machotes para sus diligencias en las cuales no en todas las ocasiones tienen la práctica de leer y cambiar debidamente los contenidos, un ejemplo muy común que encontramos al respecto es el fundamentar la sanción privativa de la libertad, con un Artículo que no encuadra en las situación jurídica concreta o que se omite aplicar debidamente la penalidad de alguna agravante indicada en el propio Artículo, por ejemplo en el mismo expediente de violación el cual se utilizo como ejemplo anteriormente se fundamente incorrectamente la penalidad ya que se dejo de lado la observación de parentesco directo de la víctima y el responsable, situación que fue debidamente corregida en sala y aumentar la penalidad impuesta en juzgado.

Sin embargo, a la par de los errores anteriormente comentados se añaden otros como la fundamentación de algunas actuaciones en preceptos inexistentes, radicando dicho error en fundamentarse en un precepto derogado, sin que la autoridad haya tomado la delicadeza de revisar el precepto en que sustenta su determinación y notar que ya no es derecho positivo, situación que sigue siendo el resultado de la mala práctica de utilizar “machotes de escritos” o plantillas para realizar sus acuerdos, dicho error ocurre en una frecuencia del 34% de los casos.

Un error muy común encontrado al momento de revisar expedientes de delitos en contra de la familia es la falta de debida fundamentación en cuanto al origen de los deberes legales familiares, mismos que devienen y están dispuestos en el código Civil respectivo en cada entidad, siendo que en el caso de AE las autoridades penales no sustentan dichos deberes en la legislación civil sustantiva, siendo así en el 12% de los asuntos revisados.

En cuanto a otro error identificado en concreto obtuvimos que en el 18% de las actuaciones respectivas, se fundamente erróneamente la intervención de los sujetos, dando por autor material a quien no es y viceversa.



ERRORES EN LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

Como errores, respecto del tema de la reparación del daño, ya sea moral o material, encontramos diversas anomalías en las actuaciones del Juzgado, siendo el principal problema la falta de acato a las disposiciones legales que establecen la obligación del Ministerio Público de solicitar la reparación de los daños y establecer un monto concreto, tal y como lo dispone el Código Penal, sucediendo una violación sistemática en dicho rubro dado que es común que los Agentes del ministerio Publico no determinen el monto concreto de los daños ocasionados y que en la mayoría de los expedientes ni siquiera ordenen diligencias pertinentes y necesarias a fin de comprobar los daños, sucediendo estos errores en un 95% el primero de los mencionados y en un 98% el último en comento.

Es práctica común en los pliegos de consignación de los Agentes del Ministerio Público el que solo se limiten a solicitar el pago de los mismos sin referirse a que consisten, cuáles son sus montos o cualquier otra particularidad al respecto.

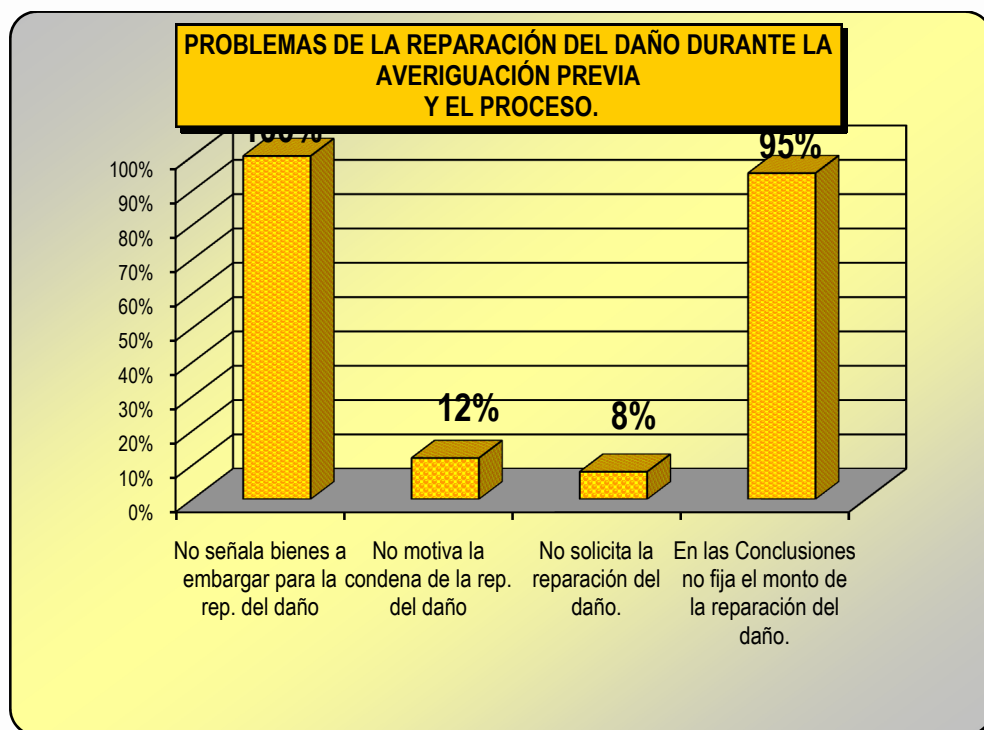
Aunado a que dicha actuación repercute en un error en cuanto al tema de la reparación del daño, también lo hace en cuanto a las obligaciones a cargo del Agente del Ministerio Público dado que las conclusiones deben contener proposiciones concretas en cuanto a las sanciones solicitadas, de acuerdo a lo establecido por el código adjetivo de la materia.

Más aún, como cuestión teórica comparativa y de importante trascendencia, podemos establecer en este estudio, que existe un problema de criterios en cuanto a la naturaleza del resultado de los delitos sexuales, comparada entre la que establecen los Tribunales Penales de AE y los homólogos del Poder Judicial de AL, radicando la diferencia de criterio en que en AE son considerados como delitos de resultado formal, debido a que sus resultados no son observables en el mundo fáctico, contrariamente a lo que establece el criterio de los tribunales de AL, al considerarlos como delitos de resultado material, no obstante lo anterior, es común que en ninguna de las dos entidades se condene al pago de daños, máxime si en AL son considerados de resultado material, mismo que obviamente sería observable en el mundo real y por tanto cuantificable, situación que nos parece en concreto de vital importancia a fin de homologar criterios y establecer la pauta para que las miles de mujeres que son víctimas de estos delitos obtengan una justa reparación de los daños, llámese daño moral o material.

Ahora bien, de contar con la fortuna de que se condene al pago de daños a favor de la víctima o sus familiares, en los procesos nunca se garantiza de forma alguna dicho pago, lo cual perjudica de nueva cuenta a la víctima al dejarla en un estado de incertidumbre jurídica, siendo esta una práctica común en nuestro sistema judicial.

Obtuvimos también que en el 8% de los expedientes analizados al no solicitar de plano el pago de los daños y perjuicios causados, violando con ello lo dispuesto por el Código Penal de AE y la fracción IV del apartado B del Artículo 20 constitucional.

Lo comentado en párrafos que anteceden lo vemos reflejado en la siguiente grafica:



Lo anterior se establece con base en los siguientes argumentos, en el 100% de los casos el Ministerio Público ya sea durante el proceso o la averiguación previa, nunca solicita que se embarguen bienes tendientes a garantizar el pago de daños, en el 12% de los expedientes en que se solicita no se motiva debidamente la condena a la reparación del daño, sobre todo y únicamente en los sucedidos con respecto a los homicidios dolosos que fueron revisados, dado que en ellos si se solicita la reparación del daño con proposiciones concretas pero que sin embargo no están debidamente fundamentadas.

Por ejemplo: en ningún caso encontramos que la reparación del daño en los homicidios aludidos fuera establecida con apego a lo dispuesto por el código sustantivo de la materia que establece que cuando se trate de delitos en contra de la integridad corporal o la vida, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor al que resulte de aplicar las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.

Como de igual forma comentamos en párrafos anteriores en el 95% de los casos el pago de daño sólo se solicita como se ejemplificó anteriormente, de manera general y evocando los preceptos aplicables, sin proposiciones en concreto que establezca montos precisos, lo que hacen solo para satisfacer a medias los preceptos que establecen como obligación el solicitar el pago de daños y perjuicios, violando en perjuicio de las mujeres victimas la obligación de establecer el pago de daños de forma concreta, clara y precisa a fin de garantizar su obtención y condena en la sentencia definitiva en el juicio.

OMISIONES EN LA INFORMACIÓN DE DERECHOS A LA VICTIMA Y AL PROCESADO.

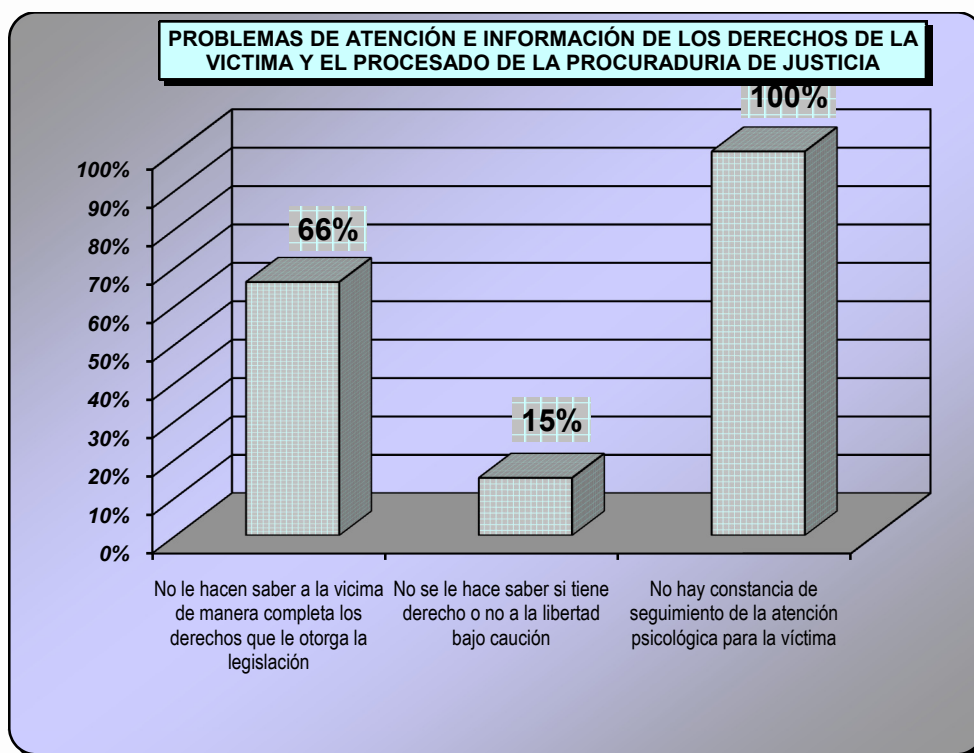
En cuanto a las omisiones que como errores encontramos respecto de la información que se brinda a la víctima y el procesado de los derechos que las diversas leyes les profieren, encontramos diversos errores, a saber:

En la averiguación previa no existe constancia escrita de que se la haya hecho saber a la víctima o procesado de forma completa los derechos que les brinda el Artículo 20 constitucional, sucediendo así en el 66% de los expedientes analizados, dado que no se establece que se les hayan explicado e informado de forma íntegra todas y cada una de las garantías que dicho numeral establece, dado que derivado de la practica forense y de las propias respuestas de los funcionarios, que describimos con anterioridad en el presente estudio, las garantías mencionadas no son informadas a las partes, dado que solo se les indican las mínimas, sin que se les lean todas y cada una de ellas y sin que mucho menos haya constancia del entendimiento de esas garantías de las partes y mucho menos constancia legal que así lo establezca.

En la averiguación previa solo se establece a manera de constancia que se la han leído íntegramente los derechos a la víctima y al procesado el contenido del Artículo relativo del Código de Procedimientos Penales, sin que conste fielmente que se le leyó y explico íntegramente el contenido total del mismo, sucediendo esta situación en el 90% de los

expedientes analizados, solo en el 10% de las causas encontramos debidamente transcritas todas y cada una de las garantías y derechos que dicho precepto establece.

Un error también observado es la falta de explicación del desarrollo de las diligencias en que intervienen tanto víctimas como procesados, a lo cual en el 96% de los expedientes nunca se les explico el alcance de las mismas.



En el 15% de las causas la/el agente del Ministerio público no hizo del conocimiento del acusado el derecho a la libertad bajo caución al cual podía acogerse, lo cual es una omisión trascendente y que viola uno de los derechos humanos más importantes como lo es la libertad.

Otro error que tiene graves repercusiones en la víctima y sus familiares y viola una serie de disposiciones nacionales e internacionales es la falta de asistencia psicológica y medica para las víctimas de los delitos estudiados, dado que en ningún caso encontramos asistencia posterior que les ayudara a reducir los efectos o daños causados por conductas delictivas que sin duda alguna dejan huellas perdurables en las víctimas, error trascendente en las actuaciones del Ministerio Público que viola lo dispuesto en el Código de Procedimientos penales de AE, siendo que más que un derecho para las víctimas, debería ser una obligación de la autoridad el determinar las medidas de asistencia necesarias a los fines referidos, dado que como derecho, sino lo ejerce la victima el M.P no está obligado a otorgarlo, de acuerdo al apego teórico de los conceptos de derecho y obligación, siendo más prudente el establecer dicha situación como obligación del A.M.P., de las causas estudiadas encontramos que en el 100% de

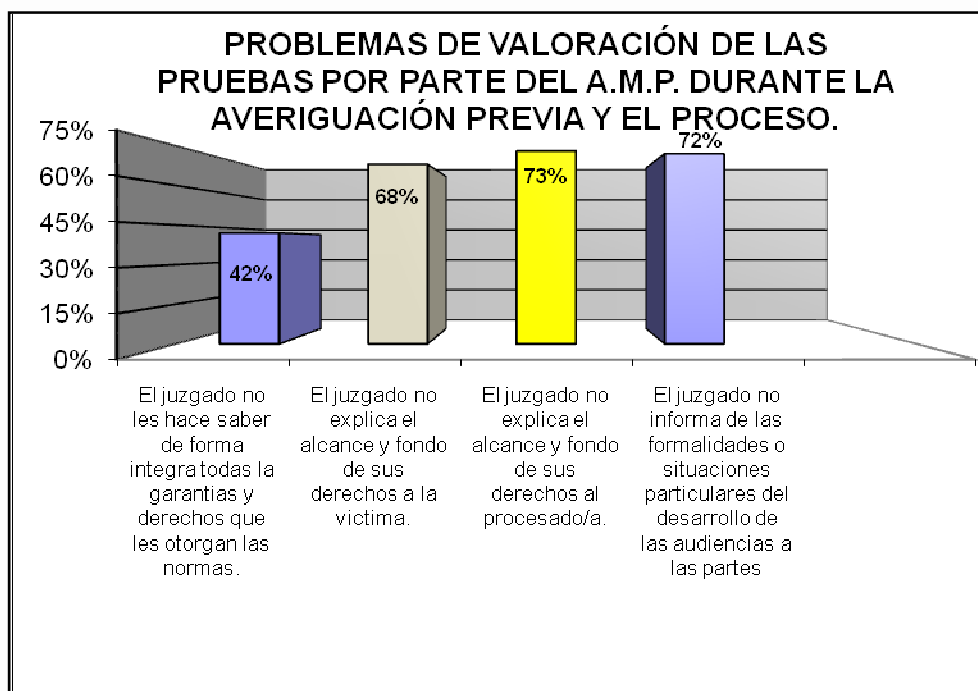
ellas no existen constancia de seguimiento de atención psicológica a la víctima, dado que nunca la ordenan como tal, sino que creen que con el peritaje en psicología que realizan es suficiente, cuestión a todas luces incorrecta.

ERRORES EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En cuanto a la valoración de las pruebas encontramos de manera común la falta de explicación del por qué se les otorga determinado valor probatorio, como ejemplos citamos los siguientes:

El Ministerio Público al momento de valorar las pruebas testimoniales establece que son una prueba plena, sin fundamentar su decisión ni mucho menos dar su motivación, limitándose a referir que se concatenan sin establecer los puntos de acuerdo entre ellas, creyendo que es suficiente el transcribirlas en el pliego de consignación.

En la valoración de la reconstrucción de los hechos, otorga un valor pleno sin establecer los motivos de tal resolución ni su fundamento, sucediendo así en el 62% de los expedientes en que se realizan diligencias de este tipo.



Es grave el observar que en el 76% de las causas al ser valoradas conjuntamente las pruebas para determinar sus alcance jurídico y la certeza que producen para el juicio, no se argumente la decisión en cuanto a la razón por la que se les otorgó cierto valor de forma conjunta, situación que repercute directamente los principios lógicos jurídicos de la valoración probatoria y la fundamentación y motivación que conlleva. Así también obtuvimos que en el 12% de las causas la/el Agente del Ministerio Público dejó de

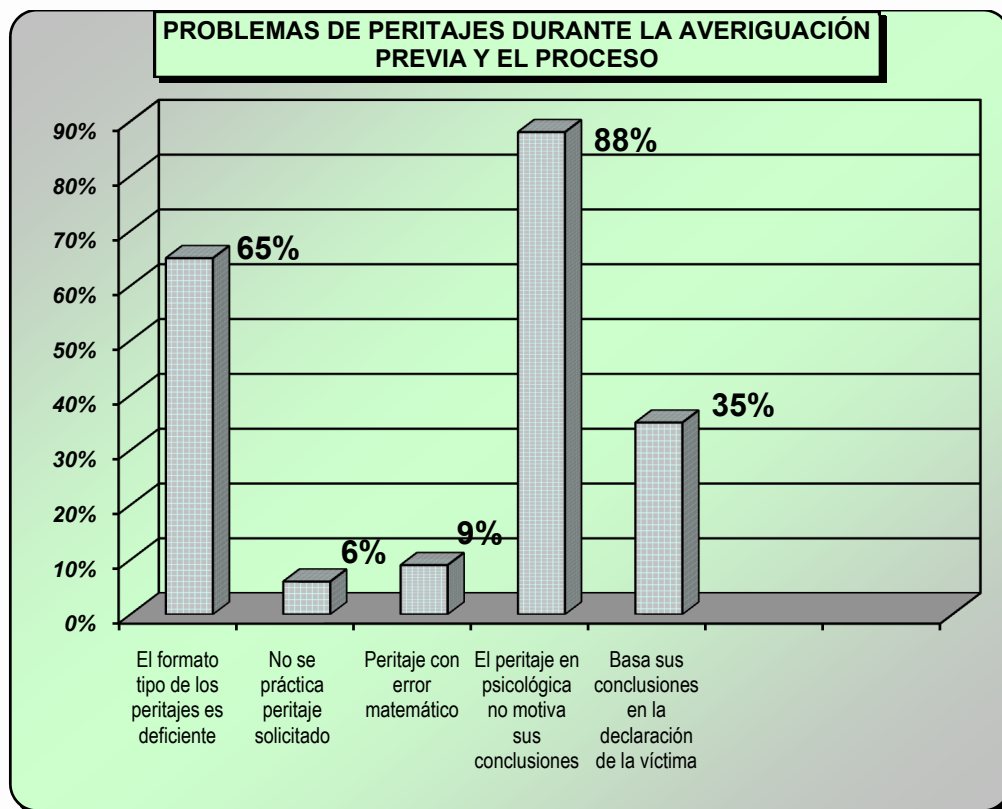
valorar alguna prueba ofrecida por las partes para acreditar sus declaraciones, con lo cual sin duda alguna se violan de igual forma los principios anteriormente referidos.

ERRORES EN LOS PERITAJES QUE SE RINDEN TANTO DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA COMO EL PROCESO.

Referente a los errores encontrados en los peritajes contenidos en los diversos expedientes analizados obtuvimos que son varios los errores:

- Los peritos no determinan la forma en que llegaron a sus conclusiones, es decir la metodología usada, sucediendo esto en el 90% de los peritajes.
- En concreto respecto de los peritajes en materia psicológica en el 88% de los casos no se establece fundamento para las conclusiones obtenidas.
- En los certificados médicos, al momento de referirse a los días en que tarda en sanar una lesión, no hacen referencia a los motivos base de sus respuestas o conclusiones, sino se limitan a establecer “son heridas que tardan en sanar de 15 a 30 días” sin establecer el porqué de tal situación, sucediendo en el 85% de los certificados médicos de integridad.
- Al momento de referirse sobre las lesiones que ponen en peligro la vida, no determina el por qué dicha lesión pone en peligro la vida, sino se limita a establecer esa conclusión, sucediendo en el 78% de los peritajes de ese estilo.
- En el 6% de las causas deja de emitirse un peritaje debidamente solicitado por el Agente del Ministerio Público, sobre todo los ordenados respecto a la identificación del presunto responsable (en dicho porcentaje no se emitió el peritaje en fotografía solicitado).
- En los dictámenes psicológicos practicados en los delitos contra la libertad sexual, es muy común ver en la conclusión de las/os peritos: “Se establece que los síntomas del comportamiento de la analizada corresponden a los de una persona que ha sido agredida sexualmente”, sin especificar ni aclarar el por qué esos síntomas son el resultado forzoso de un delito sexual.
- Como regla general en el 65% de los peritajes rendidos no son suficientes ni adecuados los formatos establecidos, sobre todo por la cuestión de improvisación de llenado con el que se rinden, al hacer falta espacios dentro del formato para establecer motivación y métodos.

Los datos anteriormente referidos los vemos graficados en la siguiente tabla:

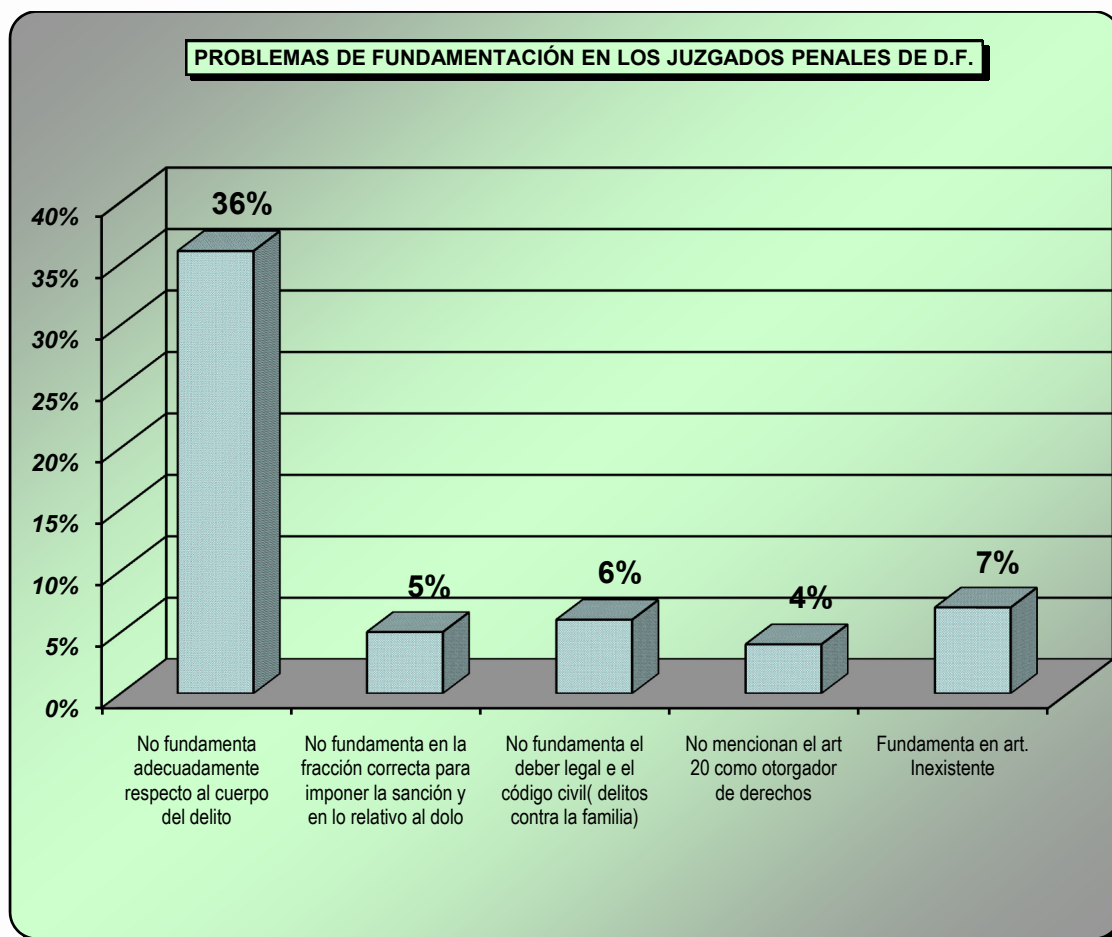


La función jurisdiccional que en conjunto atañe a la resolución de las causas y ejercicios de la acción penal decretados por las diversas Agencias del ministerio Público, se ve afectada y le repercute directamente los errores en las actuaciones del Ministerio público, lo que en ocasiones complica seriamente la tramitación de las causas y en otras incide para que los procesados siendo culpables, obtengan beneficios o libertades que de haber actuado el A.M.P. de acuerdo con sus obligaciones y cuidado, no hubieran obtenido, sin embargo y como toda actividad humana, adolece de errores u omisiones que al igual que las anteriores, en algunos casos trascendentes y afectan considerablemente el fondo del asunto y por tanto el sentido en que se resolverá.

Siguiendo la línea establecida en este documento, continuaremos con el estudio y análisis de los resultados encontrados respecto de los errores observados durante el proceso en las causas estudiadas y que fueron cometidos por las/os juezas/ces que conocían de ellos, lo que abordaremos en los mismos puntos y orden que como lo hicimos en lo referente a las actuaciones del las agencias del Ministerio Público.

ERRORES DE FUNDAMENTACIÓN.

Los problemas más comunes y frecuentes en cuanto a la fundamentación en las actuaciones de los juzgados penales en AE, son los siguientes:



De lo anterior concluimos que en un 36% de las causas estudiadas las/os juzgadores no fundamentan debidamente su determinación de tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito, dado que no establecen los principios jurídicos, normas, doctrina o jurisprudencia en las que basan su determinación. En el 5% de las causas esos errores de fundamentación se vislumbran a través de una incorrecta aplicación de la hipótesis normativa sustentada, dado que es de incongruente aplicación al caso concreto, fundamentándose en fracciones que no se apegan a realidad de los hechos.

Al igual que en el caso anterior es concluyente el determinar que en el 6% de las causas en que su origen se encuentra en una violación a un deber familiar (como en el caso de la obligación de alimentos en los juicios de incumplimiento de otorgamiento de alimentos en vía penal), no se sustenta dicho deber en normas del código civil vigente y aplicable.

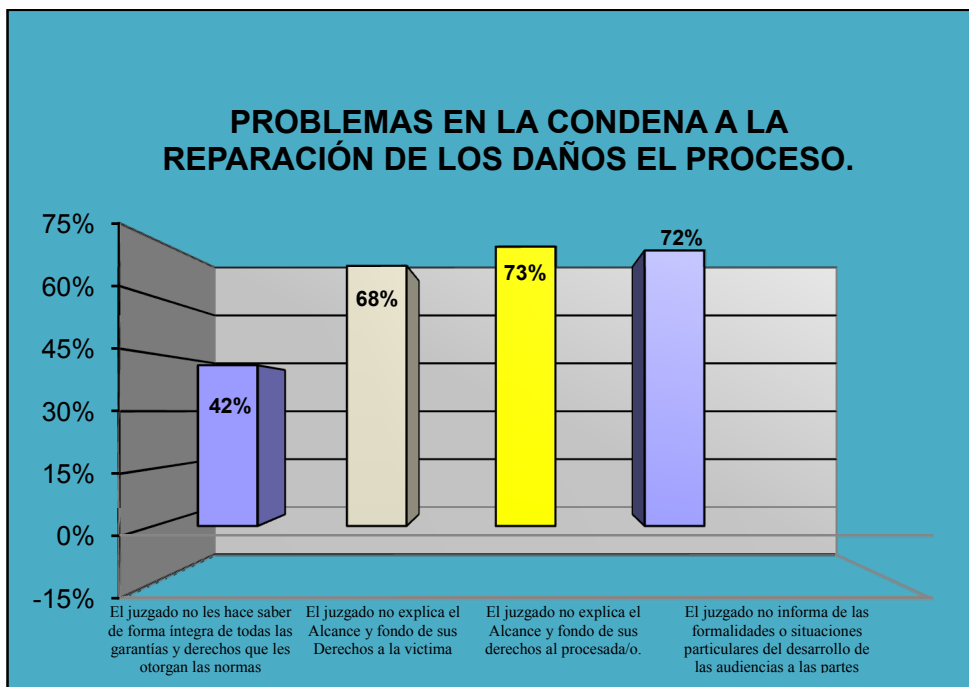
En el 4% de las causas estudiadas no se menciona el Artículo 20 Constitucional como principal fuente de las garantías de las partes en un proceso penal, sino solo se hace referencia a las contenidas en una ley local. También encontramos que en un 7% de las causas estudiadas existe al menos un error de fundamentación al apoyarse en preceptos inexistentes o incorrecta aplicación, esto sobre todo, como resultado de la práctica del uso de machotes o plantillas para realizar sus acuerdos y emitir sus determinaciones.

ERRORES EN CUANTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

En este tema que para nosotros es de una importancia marcada, encontramos que en los procesos estudiados, los errores en este rubro, no deviene propiamente de las actuaciones realizadas por los juzgados, sino que son consecuencias de las realizadas por las/os agentes del ministerio público, al ser ellas/os quienes establecen durante sus secuelas respectivas en averiguación previa y proceso, las bases sobre las cuales el juez deberá determinar su resolución en cuanto a la condena de pago de daños.

Una observación importante que obedece en el 25% de los casos en los que se absuelve al procesado al pago de daños en la comisión de delitos sexuales, versa sobre la aplicación de criterios limitados, ya que si bien es cierto que está legalmente establecido que no se pueden aplicar penas por simple analogía, también lo es que en el ámbito de pago de daños en ocasiones se cuentan con los elementos necesarios para cuantificar su pago y no se realiza así.

Lo anterior con la siguiente argumentación, por criterio de la Corte, los presupuestos presentados como prueba no podrán ser elementos para cuantificar el pago de la reparación de daños, situación que creemos nosotros errónea, dado que en la práctica en el 25% de los casos en que se solicitó el pago de daños se sustentó en una solicitud o recomendación de las personas que emitían el dictamen psicológico de la víctima en donde recomendaban un tratamiento psicológico de "X" número de sesiones, lo cual era debidamente solicitado por el A.M.P. refiriendo que cada sesión cuesta en promedio de \$250 a \$700 y refiriéndolo así al/la Titular del Juzgado para su cuantificación, a lo que si bien es cierto, no se establece como una proposición ni monto concreto, también lo es, que son bases suficientes para estimar una reparación del daño, siendo prudente el emitir una modificación en dicho sentido, siendo prudente aplicar en dicha materia los lineamientos que tiene la materia civil para el pago de daños y perjuicios ocasionados.

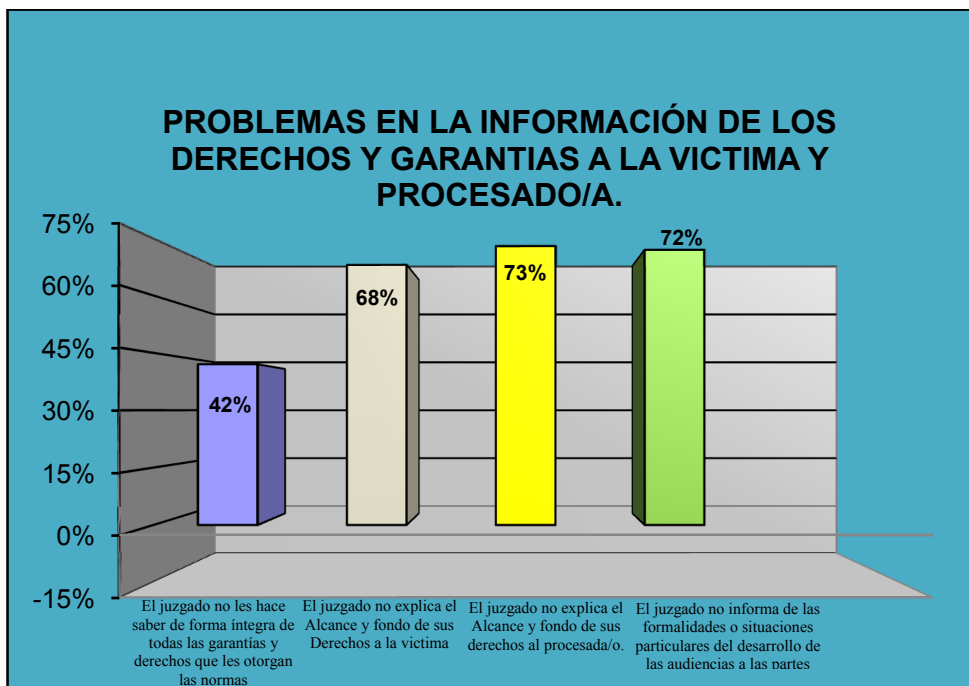


OMISIONES EN LA INFORMACIÓN DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS A LAS PARTES.

Se detectó como error constante durante todas las etapas de un procedimiento judicial es la falta de información y transparencia que existe respecto de los derechos y garantías con los que cuenta la víctima o la/el procesada/o en un juicio de esta naturaleza, error que se comete desde la propia averiguación previa y que en esta etapa vemos con continuidad, dado que en el 42% de las causas estudiadas el juzgado no les hace saber de una forma íntegra todas las garantías y derechos que otorgan las diversas normas tanto a la víctima del delito como a la/el procesada/o, siendo una grave violación al principio de certeza y seguridad jurídica como hemos referido en páginas anteriores, ahora bien de igual forma en el 68% de las causas no se explica el alcance y fondo de esos derechos y garantías a la víctima, sino que únicamente se tiene por satisfecho el requisito legal al asentar en actuaciones que se les hicieron saber sus derechos para que conste en autos, situación que deviene en una transgresión importante de resultados trascendentes para el fondo del asunto al limitar el correcto desenvolvimiento de las partes en el procedimiento.

En la misma situación que la anterior pero referente a los derechos y garantías de la/el procesada/o obtenemos que en el 73% de las causas no se les explica el alcance y fondo de los derechos que les son hechos de su conocimiento. Por último encontramos que en el 72% de las ocasiones el juzgado no informa de los pormenores, particularidades y alcances de las diligencias judiciales en que van a intervenir las partes interesadas.

Cuestiones todas las anteriores que vemos reflejadas e ilustradas en la siguiente grafica:

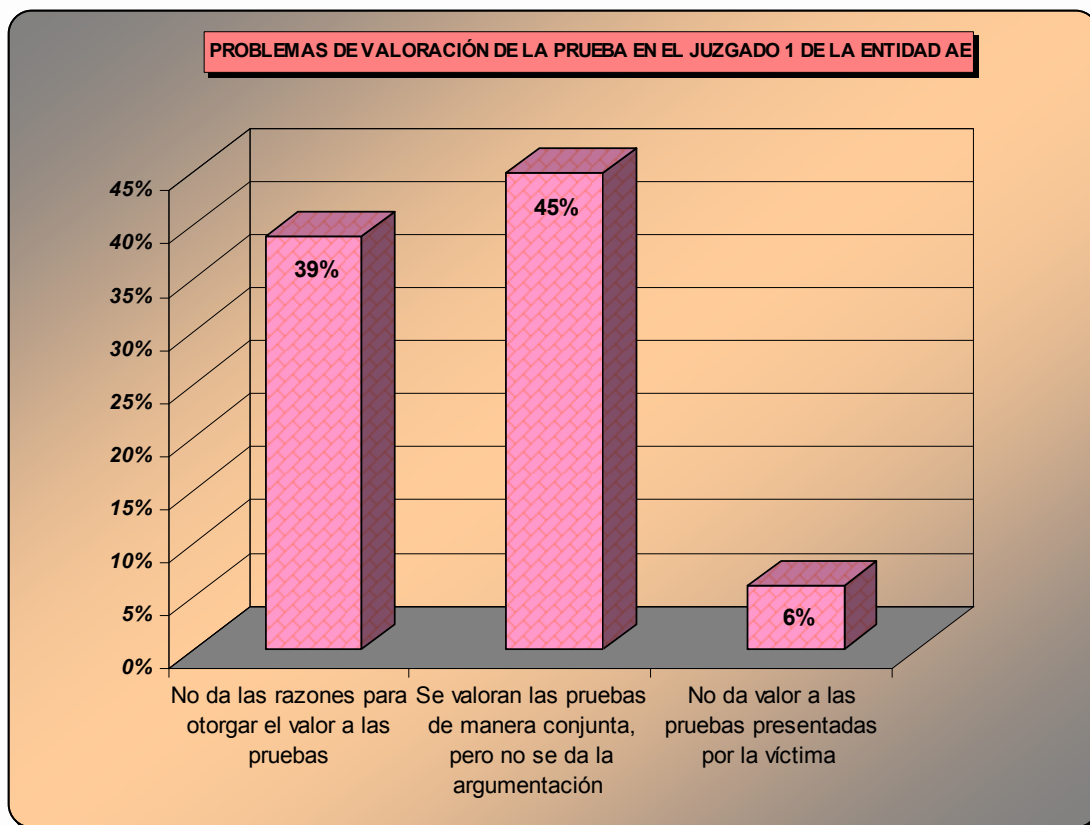


ERRORES EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los errores más comunes identificados en la valoración de las pruebas realizada en los juzgados penales de AE son similares a los ocurridos durante la averiguación previa, ya que son resultados de la utilización de formatos y plantillas que ya hemos mencionado.

En este caso en el 39% de las causas los juzgados al emitir su resolución sobre la valoración de las pruebas no establecen los motivos y argumentos en que fundan la determinación de la valoración otorgada a las pruebas. En el 45% de las causas encontramos que realizan una valoración conjunta del acervo probatoria sin manifestar los motivos o argumentos para otorgarles el valor determinado con base en su concatenación, lo cual implica nuevamente una grave violación al principio constitucional de la debida motivación y fundamentación.

En el 6% de las causas revisadas encontramos que se omitió manifestación respecto de la valoración de alguna prueba presentada por las partes.



Otro de los problemas que se ven influidos por cuanto a la falta de determinación, fundamentación y valoración de las pruebas los encontramos al obtener que en el 36% de las causas observamos una motivación inconsistente, es decir que algunos acuerdos si presentan una motivación y otros carecen de ella, o bien en la misma resolución la motivación no aparece constantemente. Respecto a la individualización y conmutación de la pena, encontramos en un 28% de las causas analizadas una carencia de motivación, es decir no argumentan la pena que imponen, ni en su caso porque se otorga la conmutación de la misma.

En 82% los problemas identificados surgen de la falta de estudio de las causas de exclusión lo que altera la impartición de justicia; lo que pasa por alto lo establecido en el Código de Procedimientos Penales.

ACIERTOS EN EL DESEMPEÑO

Como se ha señalado en los párrafos anteriores el objetivo del proyecto es realizar un estudio diagnóstico del sistema de procuración e impartición de justicia a través del análisis de las actuaciones y resoluciones emitidas por parte de la Procuraduría, así como del Poder Judicial. Debido a que el presente estudio busca determinar la realidad de procuración e impartición de justicia en AE, es necesario identificar no solamente las deficiencias del sistema, sino también los aciertos lo que permite tanto fortalecer como diseminar las mejores prácticas implementadas en AE.

Para tal efecto, el estudio abarca todo el proceso penal con el principal enfoque sobre las actuaciones de los Fiscales del Ministerio Público y los jueces.

Los aciertos que se identificaron se dividen en cuatro grupos referentes a; la competencia, formalidades del proceso, la fundamentación de las actuaciones y determinaciones para los inculpadados y respeto a las garantías de las víctimas u ofendidos.

El estudio arrojó aciertos constantes durante el proceso; tanto en la Averiguación Previa como en parte de la Instrucción Judicial.

1. Aciertos de Competencia :

- Fijar competencia en la orden de aprehensión
- Fijar competencia en el auto de término constitucional

2. Aciertos de Formalidades:

- Consta en autos que solicitó o no duplicación del término constitucional
- Consta en autos el día, mes y hora en que se practicaron las actuaciones
- Consta en autos que las fechas y cantidades fueron escritas con letra y cifras
- Consta en autos que todas las actuaciones terminaron con una línea trazada debajo del texto.
- Consta en autos que todas las Fojas del expediente fueron entreselladas
- Consta en autos que todas las Fojas del expedientes fueron Rubricadas

3. Aciertos de información al inculpado sobre los derechos:

- En el auto de término constitucional el juez/a entra al estudio de las causas de exclusión o causas excluyentes de incriminación conformidad con lo ordenado por el Código Penal.
- Calificación Legal de la detención ministerial.

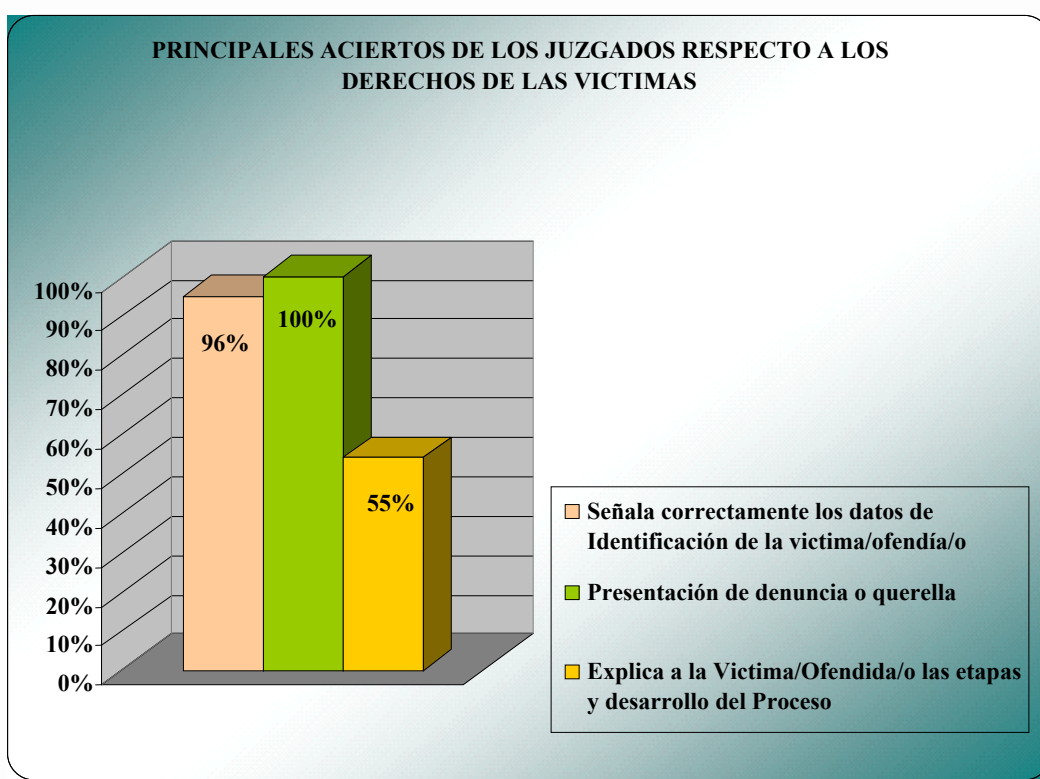
4. Aciertos sobre las garantías de la víctima:

- Datos de identificación de la Víctima/Ofendido Artículo 20, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Explicación a la víctima las etapas y desarrollo del procedimiento penal Artículo 20, fracción I de la Carta Magna. Recepción de Denuncia o Querrela por parte de la Víctima/ Ofendido Art 20 Fracción I, de la Constitución Federal.

Las gráficas que se presentan a continuación muestran la frecuencia de los aciertos en el desempeño de las/os Agentes del Ministerio Público en los rubros mencionados anteriormente.

La siguiente gráfica se refiere a la buena aplicación de la ley en cuanto al respeto de los Derechos de Víctima/Ofendido.



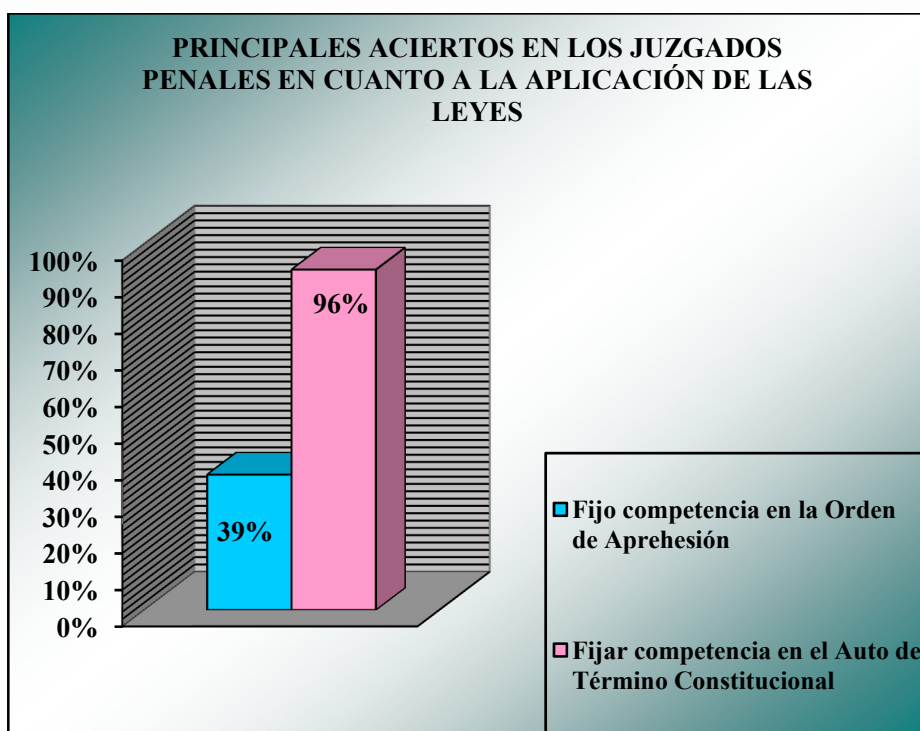
En la grafica anterior puede observarse que en 96 % de los expedientes resueltos en los Juzgados Penales la o el Agente del Ministerio Publico señala en forma correcta los datos de identificación de la víctima/ofendido. En un 100% se encontró que en los casos en que debería presentarse querrela o denuncia según corresponda, este requisito fue totalmente cubierto. Así también en un 55% de los casos el o la Agente del Ministerio Publico hace constar que le fue explicado a la víctima u ofendido las etapas y desarrollo del proceso. Cabe señalar que lo último es un elemento indispensable de la transparencia procesal, ya que permite a una persona que busca la justicia tener un conocimiento de cuáles son los pasos que deben seguirse para lograr la misma.

Es de señalarse que los tipos de aciertos que se encontraron en los expedientes a través del análisis son idénticos en todos los Juzgados.

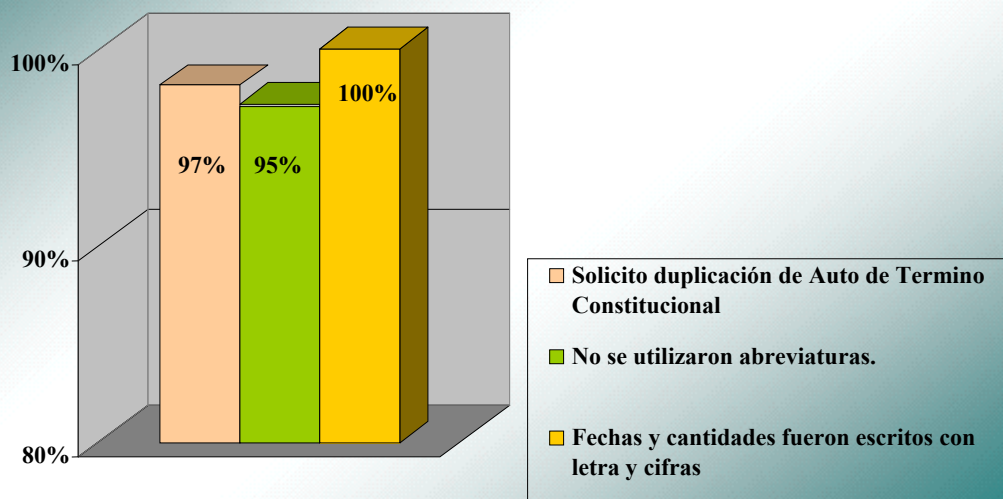
Ahora bien como se ha señalado en la introducción del presente capítulo el análisis realizado abarco no solamente el trabajo de la Procuraduría; sino también el de las y los Jueces y personal de los Juzgados Penales. Por tanto, en las siguiente graficas reflejan los aciertos en el desempeño de dichos juzgados.

En cuanto a la aplicación correcta de las leyes penales en los Juzgados podemos señalar lo siguiente:

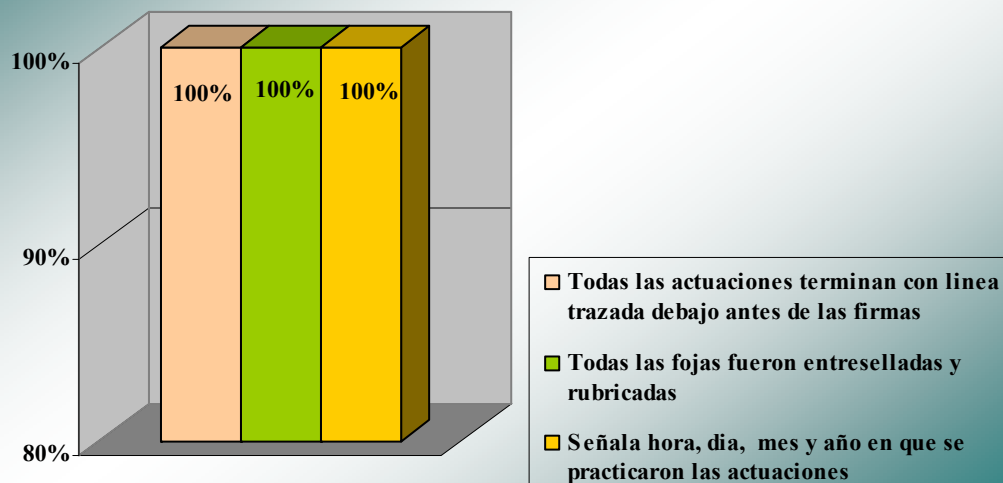
ACIERTOS EN LAS FORMALIDADES DEL PROCESO PENAL



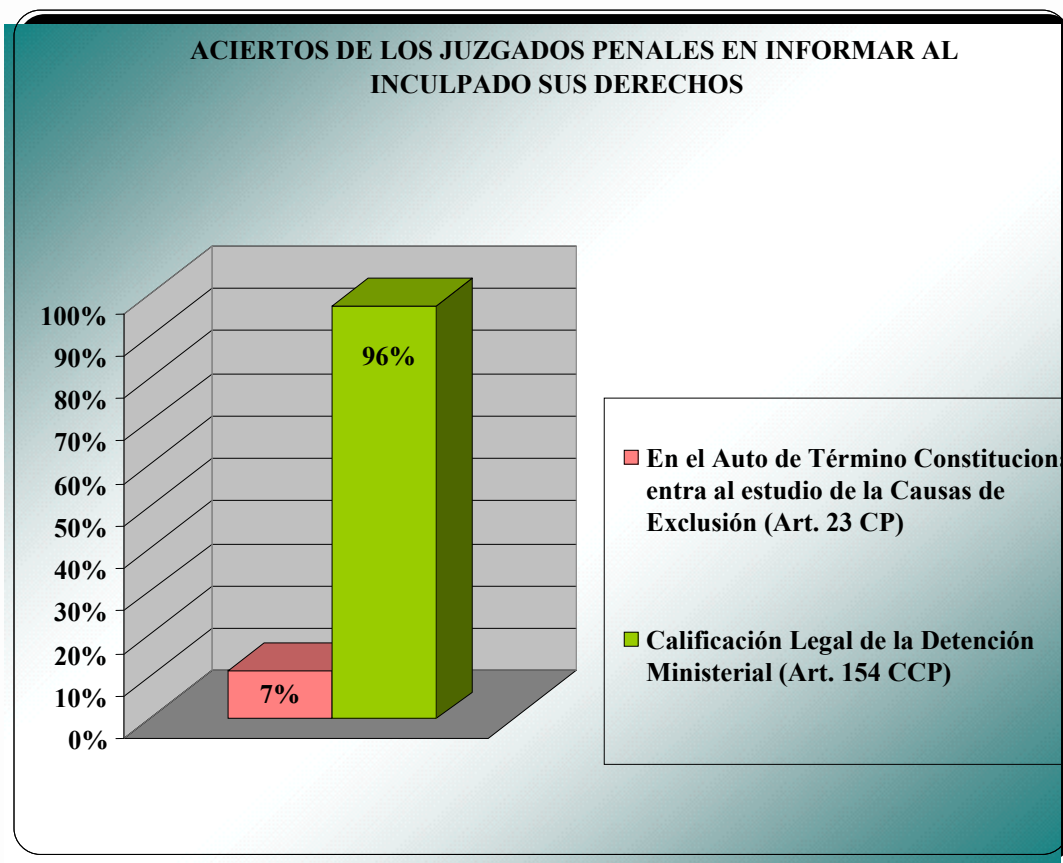
PRINCIPALES ACIERTOS DE LOS JUZGADOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEYES



PRINCIPALES ACIERTOS DE LOS JUZGADOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEYES (Cont)



ACIERTOS DE LOS JUZGADOS PENALES EN INFORMAR AL INCULPADO SUS DERECHOS



Entidad Federativa AL

El análisis de expedientes ha sido realizado con el propósito de determinar la calidad de las actuaciones dentro de un proceso penal que abarca el trabajo de todos los servidores públicos que intervienen en dicho proceso, es decir los policías, los Fiscales del Ministerio Público, los Jueces y personal de los Juzgados así como Magistrados, también el estudio analiza las actuaciones de los Jueces y Magistrados Federales en los casos en que se haya promovido un Juicio de amparo bien sea directo e indirecto.

La muestra seleccionada para el análisis fue calculada con un índice de 95% de confiabilidad a partir del total número de sentencias emitidas para cada tipo del delito seleccionado, para garantizar la validez de los resultados. Dado lo anterior se analizaron 76 expedientes de los Juzgados Penales.

Los delitos fueron seleccionados por considerarse por las y los coordinadores como los más representativos de la discriminación contra las mujeres de acuerdo a lo estipulado por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará, es así que seleccionamos para el análisis las causas de homicidio, violación, estupro, maltrato familiar e incumplimiento de obligaciones alimentarias.

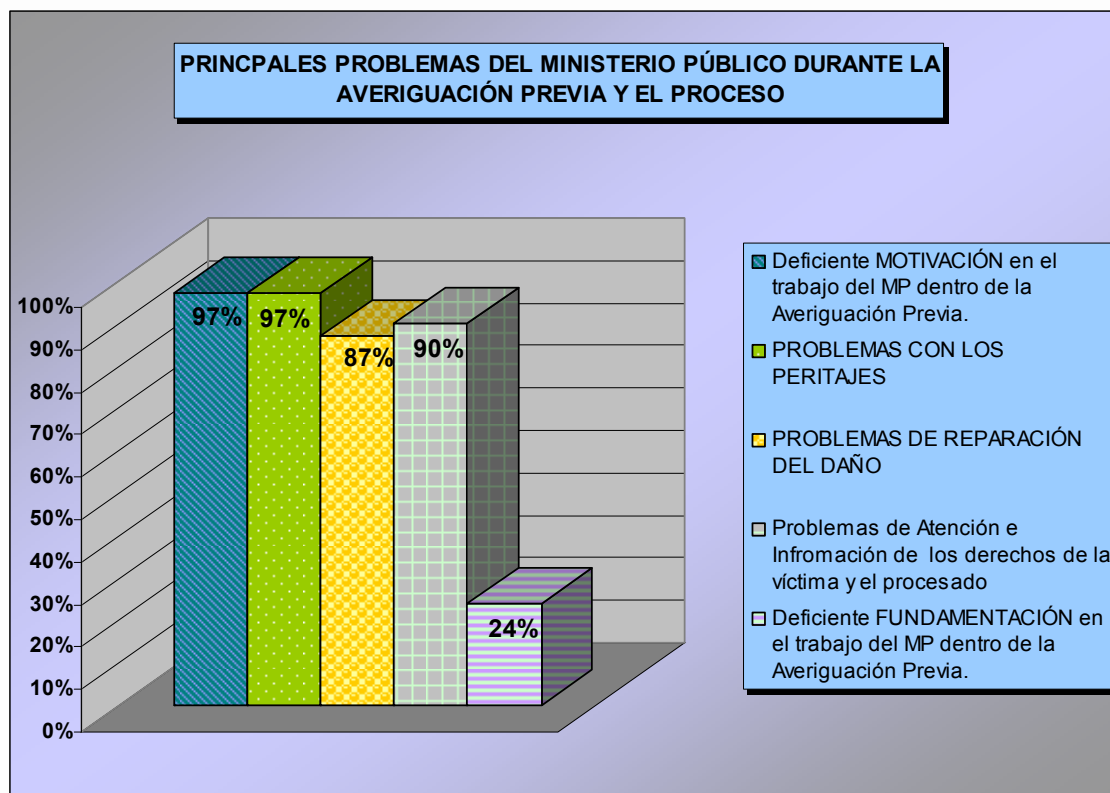
Al realizar el análisis objetivo de las resoluciones tanto ministeriales como judiciales se pudieron apreciar algunas deficiencias en el desempeño de las y los Agentes del Ministerio Público, así como las y los jueces, las cuales se hacen presentes en las distintas etapas procesales desde la Averiguación Previa hasta la ejecución de la sentencia, inclusive el amparo.

Dentro del estudio realizado se encontraron deficiencias frecuentes que podemos calificar como los “*problemas principales*”. Las gráficas que se apreciarán más adelante, explican a detalle dichos problemas. Debemos subrayar que los problemas principales fueron categorizados en distintas áreas que son:

- **MOTIVACIÓN.** Que se refieren principalmente a la falta de argumentación y señalamiento que justifique tanto la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, como de las pruebas recabadas e inclusive del nacimiento del deber legal en los delitos contra la familia;
- **FUNDAMENTACIÓN.** Se trata de errores en la aplicación de la ley en cuanto a la tipificación de la conducta, las agravantes y la forma de participación de los sujetos activos, entre otras; es decir que el fundamento legal utilizado bien sea por la/el Fiscal del Ministerio Público o la/el jueza/ez es incorrecto o carece del mismo.
- **PERITAJES.** Se refieren principalmente a que el formato utilizado por las y los peritos contiene deficiencias o no corresponde al tipo del estudio solicitado; la descripción de la metodología y técnica utilizadas no permiten determinar cómo se llega a la conclusión del dictamen respectivo así como errores matemáticos y utilización del testimonio de la víctima como la única fuente para poder realizar el exámen pericia.
- **REPARACIÓN DEL DAÑO.** Se refieren principalmente a que no se presentan elementos en el pliego de consignación que permitan acreditar el monto de reparación del daño, ni se fija concretamente el monto en el momento de presentar las conclusiones de acusación.
- **INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS OTORGADOS A LA VICTIMA Y EL PROCESADO.** Se refieren principalmente a que no se le explica la totalidad de los derechos consagrados en la constitución y la legislación penal sustantiva y adjetiva según sea el caso, así como no se puede determinar si se dio seguimiento a la atención psicológica a la víctima.

- **VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.** Se refiere principalmente a que al momento de realizar la valoración de las probanzas no se argumenta cual es el valor expreso que se le da a éstas es decir no se señala el valor probatorio pleno, preponderante o de indicio.

Las áreas problemáticas apuntadas con anterioridad se especifican en las siguientes gráficas.



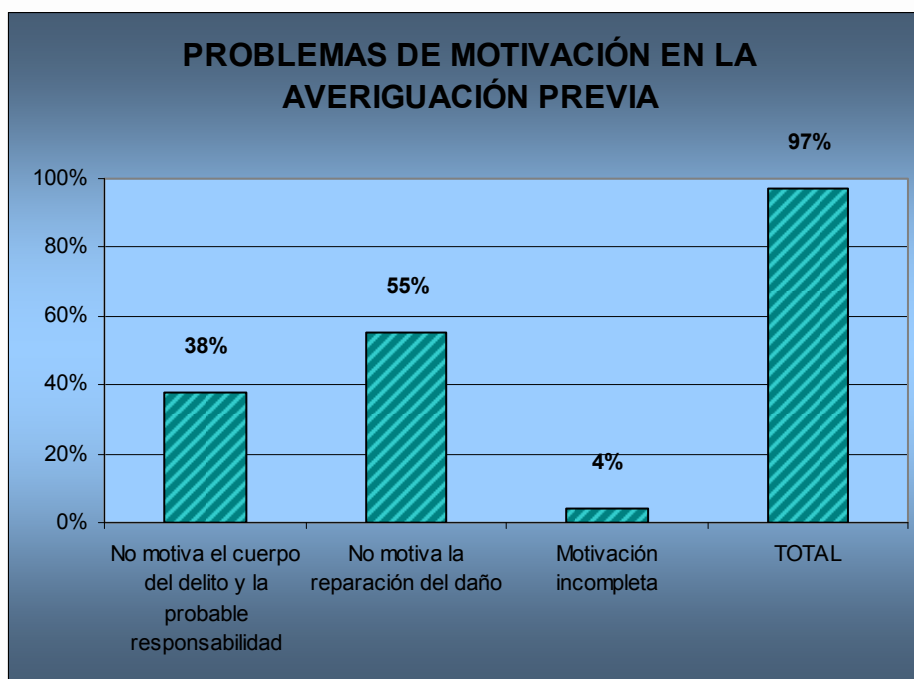
Como podemos observar, los porcentajes representan los principales problemas que cometen las y los Agentes del Ministerio Público durante la etapa de la averiguación previa y el proceso.

Esto quiere decir que en el 97% de los expedientes se encontraron problemas de motivación, en el ejercicio de la acción penal, en la motivación de la probable responsabilidad; conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos Penales; en la reparación del daño, conforme a lo estipulado por el Código Penal y el Código de Procedimientos Civiles; o motivación incompleta; un ejemplo es el de no establecer concretamente el resultado de la acción.

En 72% de los casos se identifican problemas con los peritajes, como la utilización de formatos tipo deficientes o falta de explicación de la metodología utilizada, conforme a lo estipulado por el Código de Procedimientos Penales.

En el 87% encontramos deficiencias en cuanto a la reparación del daño, al no solicitarla, no motivarla o no señalar bienes a embargar para hacer efectiva la reparación del daño conforme a lo estipulado por el Código Penal, en 90% de los expedientes se detectan problemas de atención e información para la víctima u ofendida/o y el procesado respecto de la información de sus derechos conforme a lo estipulado por el Código de Procedimientos Penales, no hacerle saber si tiene derecho o no a la libertad bajo caución conforme al Código de Procedimientos Penales, no haberle brindado a la víctima atención legal o psicológica; el 24% de los expedientes indica los problemas con respecto de la fundamentación de los elementos del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad conforme a lo estipulado por el Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, no llevar a cabo una relación exhaustiva de los elementos del cuerpo del delito.

Los problemas de motivación de la Procuraduría se muestran y especifican en la siguiente gráfica:

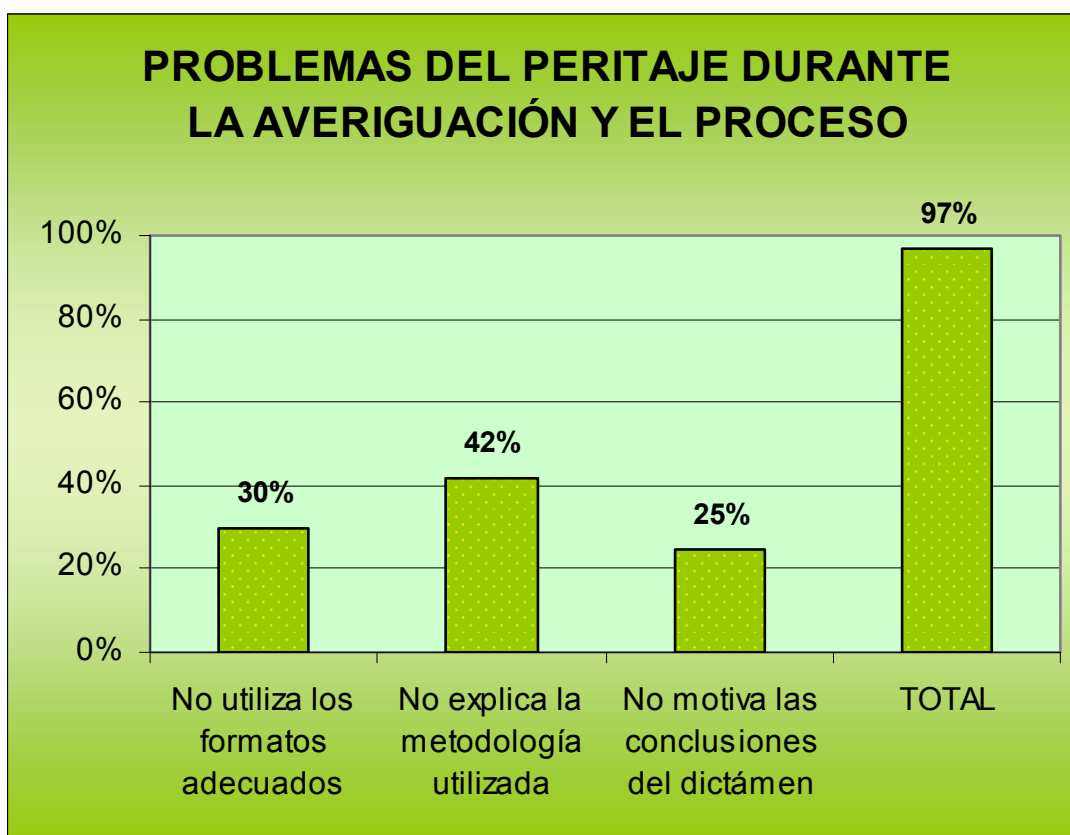


Como se puede observar en la gráfica anterior, el 38% de los problemas de motivación de la Averiguación Previa se refieren falta de motivación de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, algunos ejemplos de ello son: según el MP no tiene la obligación de integrarlo por no estar dispuesto en el código penal, pero no toma en cuenta que la norma máxima es la constitución y que en esa fecha ya se establecía la obligación de integrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; en diversas ocasiones encontramos que sólo hace mención de los hechos y describe las pruebas sin darles valor; en algunos otros que no se establece concretamente el resultado de la acción o que no se motiva la materialidad del resultado; no se relacionan las pruebas con los elementos del delito; no se señala la forma de intervención de los sujetos.

En el 55% falta motivación de la solicitud de condena a la reparación del daño conforme a lo estipulado por el Código Penal y el Código de Procedimientos Civiles. Esto sucede en la mayoría de los casos, porque sólo se hace mención de la solicitud del pago de la misma sin establecer las razones que justifican la condena.

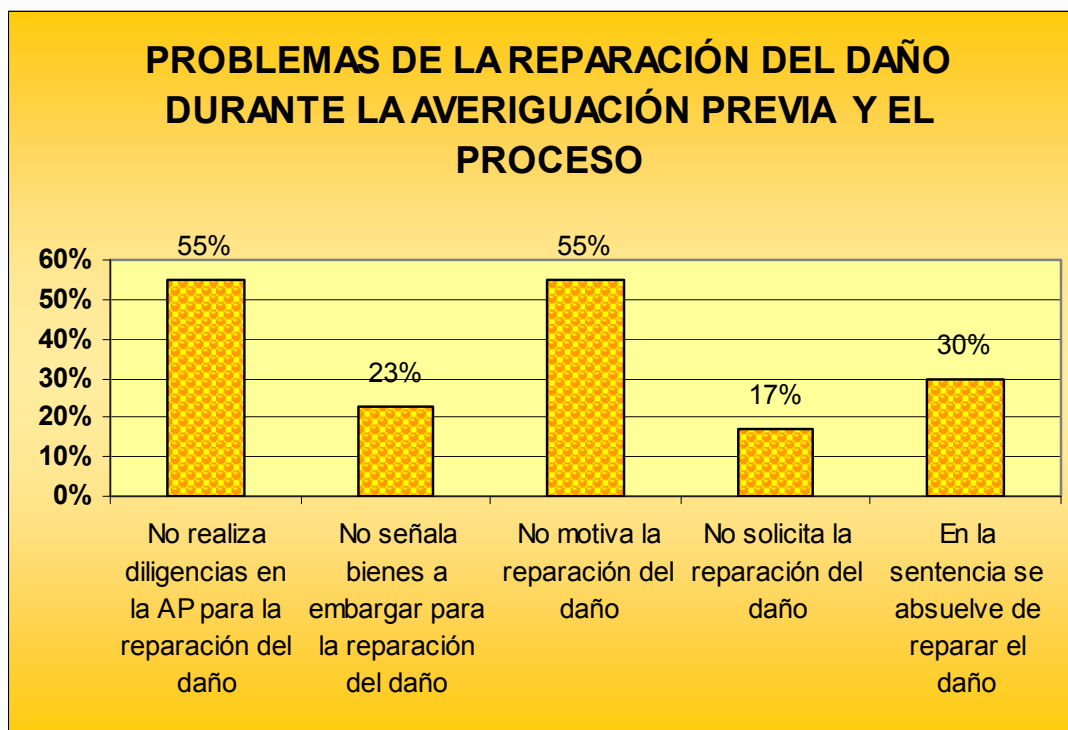
En el 4% de los casos, encontramos que la motivación estuvo incompleta.

Los problemas con los peritajes se especifican en la siguiente gráfica:



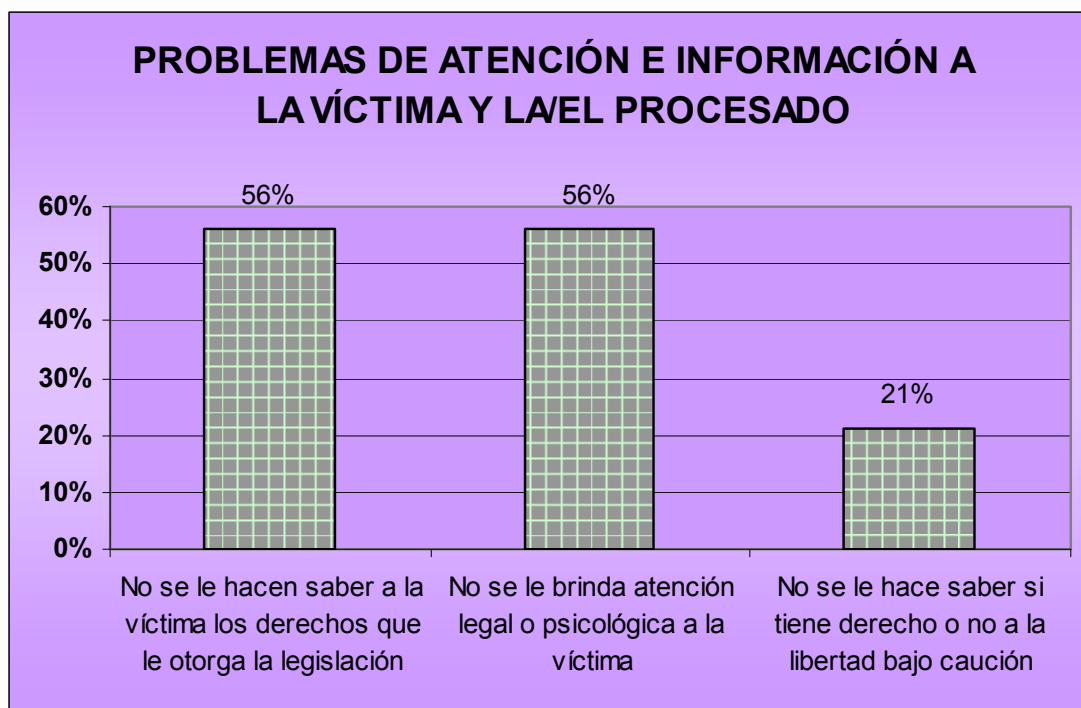
Los problemas con los peritajes aunque no son propiamente responsabilidad de las y los Agentes del Ministerio Público se han considerado importantes ya que afectan el proceso penal en todas sus etapas, inclusive las deficiencias en los peritajes pueden ser las causas de recursividad. Por tanto, se les ha dado una especial atención al tomar en cuenta las deficiencias en los mismos y ubicarlos dentro de los principales problemas del Ministerio Público. El 30% de todos los problemas que se refieren a los peritajes es la utilización de formatos-tipo inadecuados o deficientes. El 42% se deben a que no explican la metodología utilizada y el 25% a que no motiva cómo se llegó a las conclusiones del dictamen, conforme al Código de Procedimientos Penales.

Los problemas de reparación del daño se especifican en la gráfica que sigue



En la gráfica anterior se reflejan las deficiencias en cuanto a la reparación del daño, de los cuales el 55% representa que el Ministerio Público no realiza las diligencias necesarias durante la Averiguación Previa para la reparación del daño; el 23% no señala los bienes a embargar para garantizar el pago de la reparación del daño; el 55% no motiva la reparación del daño; el 17% no se solicita la reparación del daño y el 30% en la sentencia se absuelve al procesado de la reparación del daño, a pesar de que su monto pudo cuantificarse con base en las pruebas presentadas durante la instrucción. Respecto de este último punto, debemos mencionar que las y los jueces, de acuerdo al Código Penal, están obligados a imponerla de oficio cuando dictan sentencia condenatoria.

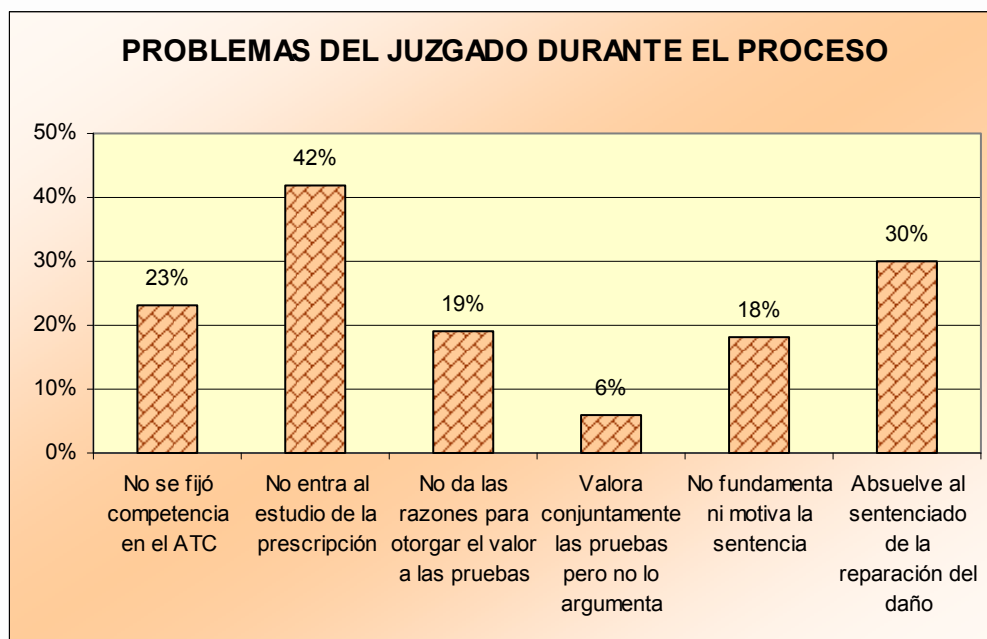
Los problemas de la atención e información de los derechos que otorga la Constitución y la legislación local se describirán en la siguiente gráfica:



Los problemas que se muestran en la gráfica que antecede tienen que ver con los derechos y garantías que otorga la constitución y la legislación local tanto a la víctima como al procesado. El 56% de las deficiencias en esta categoría es el que no le hacen saber a la víctima la totalidad de los derechos que le otorga la Constitución²¹ y la legislación local; el 56% es porque no se le brinda atención legal o psicológica a la víctima y el 21% de las deficiencias es que no se les hace saber a los inculcados si tienen o no derecho a la libertad bajo caución, lo cual se contrapone directamente con lo señalado en el Artículo 20 constitucional y por los Artículos 172 y 160 del Código de Procedimientos Penales.

Algunos de los problemas que encontramos respecto de los Juzgados durante el Proceso se muestran en la gráfica siguiente:

²¹ Artículo 20 Constitucional Apartado B



La anterior gráfica muestra los principales problemas que se presentan en las actuaciones y resoluciones de las/os Jueces y personal del Juzgado según su frecuencia. De lo anterior se desprende que en 23% de los expedientes se omitió fijar la competencia durante el auto de término constitucional, conforme al Código de Procedimientos Penales de AL.

En el 42% de los casos no se entró al estudio de la prescripción; en el 19% de los casos no se dieron las razones por las cuales se le otorgó el valor a las pruebas aportadas durante el procedimiento.

En el 6% de los casos se valoran conjuntamente las pruebas pero no se argumenta el porqué de ello.

En el 18% de los casos no se fundamenta ni motiva la sentencia, conforme al Código de Procedimientos Penales y en el 30% de los casos, se absuelve al sentenciado de la reparación del daño a pesar de haberse podido cuantificar con base en las pruebas presentadas en la instrucción, a pesar de lo estipulado por el Código Penal que nos dice que las y los Jueces están obligados a imponerla de oficio al responsable del delito.

ACIERTOS EN LAS ACTUACIONES

A continuación enumeraremos la serie de aciertos encontrados en las actuaciones del los Ministerios Públicos, las y los peritos y los Juzgados, determinados a partir del análisis de expedientes, conforme a las matrices entregadas por la Coordinación Central a las y los Coordinadores locales para el análisis de expedientes llevado a cabo por los propios técnicas/os.

Ministerio Público

- En una ocasión encontramos que acordó diligencia conciliatoria.
- Dirigir a la Policía Judicial en la investigación que esta haga para comprobar el cuerpo del delito ordenándole la práctica de las diligencias que, a su juicio serían necesarias para cumplir debidamente con el cometido.
- Pedir al juez la práctica de las diligencias necesarias para comprobar la responsabilidad del acusado.
- Solicitar en su momento el apoyo de los peritos para el exámen de alguna persona o de algún objeto que requiera conocimientos especiales.
- Pedir al juez al juez la aplicación de la sanción que en caso concreto estime aplicable.
- En la Averiguación previa hace el análisis de cada uno de los elementos que conforman el cuerpo del delito de manera correcta.
- En el inicio de manera correcta se declara competente para conocer del asunto.
- Se les proporciona ayuda a los menores hijos de la occisa que sufrían maltrato.
- Son trasladados a un albergue, hasta que el tío de los menores se hace responsable de ellos
- Se ubica al probable y es detenido
- Se trasladan al lugar donde se encuentra el cadáver en compañía del probable.
- Realizan todas las investigaciones pertinentes para la detención del probable.
- Aplicación del principio *in dubio pro reo*.

Peritos

- Realiza correctamente su peritaje y también explica su método empleado.
- Realizar el estudio solicitado de acuerdo a los formatos y materiales para realizar su trabajo que tienen a la mano, reportando en forma clara y concreta los resultados obtenidos.
- El comentario que los peritos hacen respecto a los exámenes que realizan sirven al juzgador para complementar la resolución emitida por la autoridad judicial.

- Se trasladan al lugar de los hechos a la exhumación del cadáver.
- Se pide el apoyo a protección civil.
- Se toman las fotografías del cuerpo.
- Se realiza la necropsia, donde se aclara que la muerte de la señora no fue repentina, sino por 3 golpes en la cabeza.

Juzgados

- La sentencia emitida es muy clara y entendible, tanto en la fundamentación y motivación como en los resolutivos.
- La presentación de la sentencia permite localizar los puntos relevantes gracias a las palabras subrayadas que utilizan.
- En la orden de aprehensión, de manera correcta realiza la motivación para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito.
- En la orden de aprehensión se encuentra debidamente motivada la presunta responsabilidad.
- En la declaración preparatoria, de manera correcta establece que no tiene derecho a gozar de la libertad bajo caución por tratarse de un delito calificado como grave.
- En la declaración preparatoria incluye la transcripción completa de las garantías que le otorga al indiciado el Artículo 20 de la Constitución.
- En el auto constitucional de manera correcta se declara competente para conocer del asunto.
- En el auto constitucional de manera correcta hace la motivación para tener por demostrada la existencia de los elementos del cuerpo del delito.
- En el auto constitucional de manera correcta hace la motivación para tener por demostrada la probable responsabilidad.
- En la sentencia de manera correcta hace la motivación para tener por demostrada la existencia de los elementos del cuerpo del delito, así como también hace el estudio de los agravantes.

- En el auto constitucional se ratifica la detención material por tratarse de flagrancia equiparada y ser un delito grave (art. 9 CPEM).
- Señala su competencia en la orden de aprehensión: es competente ya que corresponde al fuero común la penalidad señalada del ilícito compete al Juzgado, además fueron consumados dentro de la jurisdicción territorial correspondiente al Tribunal.
- En la declaración preparatoria y en el auto constitucional señala la hora en que se dictan, con esto se verifica si esta dentro del término.
- Imposición de la pena de acuerdo a la culpabilidad.
- Considera los criterios culturales y sociales referentes a la mujer.
- Aplicación del principio de primo delincuyente.
- Se respeta el tiempo de las audiencias.
- Todo el proceso se lleva a cabo en los tiempos implementados por la ley.
- Se recibieron todas las pruebas aportadas por las partes.
- Se tomaron en cuenta todos los elementos presentados por el Ministerio Público.
- Se conserva intacto el lugar de los hechos y se presenta el arma que provoca la muerte a la víctima.

Entidad Federativa AF

La muestra elegida para el presente análisis representa el número total de sentencias definitivas que anualmente se emiten para cada tipo de delito seleccionado en los cuatro Juzgados seleccionados. Dado lo anterior se analizaron 41 expedientes.

La muestra se compuso de la siguiente manera:

1. HOMICIDIO CALIFICADO.

De este delito referimos que realizó el análisis de diez expedientes de Homicidio Calificado en contra mujeres.

2. VIOLACIÓN

Se revisaron veintiún expedientes de delitos por violación de mujeres, que en algunos casos eran menores de edad.

3. ABUSO SEXUAL

Se hizo el análisis de un expediente por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

4. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.

Se revisaron por este delito dos expedientes.

5. VIOLENCIA FAMILIAR.

Se analizaron dos expedientes este delito en contra de mujeres.

Al realizar el análisis objetivo de las resoluciones tanto ministeriales como judiciales se pudo apreciar algunas deficiencias en el desempeño de las y los Fiscales del Ministerio Público, así como las y los jueces, las cuales se hacen presentes en las distintas etapas procesales desde la Averiguación Previa hasta la ejecución de la sentencia, inclusive el amparo.

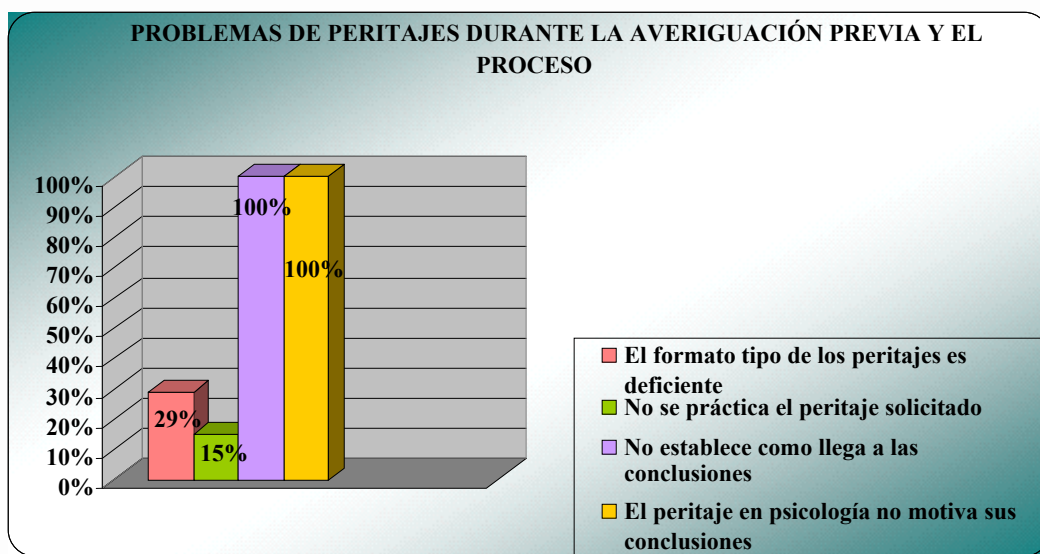
Dentro del estudio realizado se encontraron deficiencias frecuentes que podemos calificar como los “*problemas principales*”. Las gráficas que se apreciarán más adelante, explican a detalle dichos problemas. Es de subrayarse que los problemas principales fueron categorizados en distintas áreas que son:

- **MOTIVACIÓN** que se refieren principalmente a la falta de argumentación y señalamiento que justifique tanto la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, como de las pruebas recabadas e inclusive del nacimiento del deber legal en los delitos contra la familia, así también problemas en las conclusiones del Ministerio Público referente a que dicha determinación no contiene proposiciones concretas, lo que es un requisito indispensable de acusación señalado por el Código de Procedimientos Penales.
- **FUNDAMENTACIÓN** Se trata de errores en la aplicación de la ley en cuanto a la tipificación de la conducta, las agravantes y la forma de participación de los sujetos activos, entre otras; es decir que el fundamento legal utilizado bien sea por la/el Fiscal del Ministerio Público o la/el jueza/ez es incorrecto o carece del mismo.
- **PERITAJES** que se refieren principalmente a que el formato utilizado por los peritos contiene deficiencias o no corresponde al tipo del estudio solicitado; la descripción de la metodología y técnica utilizadas no permiten determinar cómo se llega a la conclusión del dictamen respectivo, así como la utilización del testimonio de la víctima como la única fuente para poder realizar el exámen pericial.
- **REPARACIÓN DEL DAÑO** que se refieren principalmente a que no se presentan elementos en el pliego de consignación que permitan acreditar el monto de

reparación del daño, ni se fija concretamente el monto en el momento de presentar las conclusiones de acusación tal como lo señala el Código de Procedimientos Penales de AF.

- **INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS OTORGADOS A LA VÍCTIMA Y EL PROCESADO** que se refieren principalmente a que no se le explica la totalidad de los derechos consagrados en la constitución y la Legislación Penal Sustantiva y Adjetiva según sea el caso, así como no se puede determinar si se dio seguimiento a la atención psicológica a la víctima.
- **VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS** que se refiere principalmente a que al momento de realizar la valoración de las probanzas no se argumenta cual es el valor expreso que se le da a éstas es decir no se señala el valor probatorio pleno, preponderante o de indicio.

Los problemas con los peritajes se especifican en la siguiente gráfica:

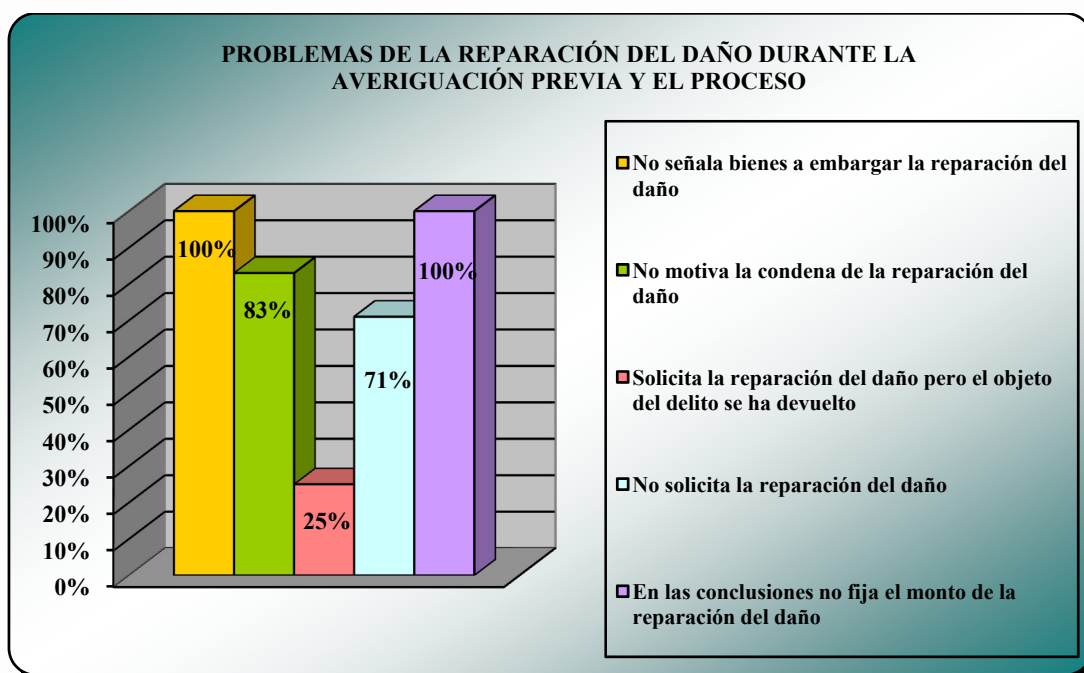


Los problemas con los peritajes aunque no son propiamente responsabilidad del Fiscal del Ministerio Público se consideran importantes, pues afectan el proceso penal en todas sus etapas, inclusive las deficiencias en los peritajes pueden ser las causas de recursividad. Por tanto se les ha dado una especial atención al tomar en cuenta las deficiencias en los mismos y ubicarlos dentro de los principales problemas de la Fiscalía el 29% de todos los problemas que se refieren a los peritajes es la utilización de formatos-tipo inadecuados o deficientes. El 15% de las deficiencias se refieren a que el Ministerio Público solicita la práctica de determinado peritaje y este no se realiza.

Asimismo en un 100% de las causas revisada, el dictamen pericial no establece como se llega a la conclusión del mismo pero mas aún no determina el nexo causal entre la conducta desplegada y el resultado de la misma, por igual los peritajes realizados en materia de psicología no se motivan la parte de las conclusiones en un 100%. Todo lo anterior pasa por alto lo previsto en el Código Procesal Penal de AF.

El hecho de que la o el Ministerio Público, solicite un peritaje y éste no se realice o bien se haga de forma inadecuada, ocasiona la falta de un debido proceso implicando con ello una serie de violaciones procesales y que la sentencia no sea resuelta conforme a derecho, trayendo resultados perjudiciales para la víctima/ofendida/o, además de que si bien en algunos casos se le da apoyo psicológico el mismo no sigue las reglas establecidas en los ordenamientos jurídicos y por ende dichos dictámenes no brindan la protección completa a sus derechos.

Los problemas de reparación del daño se especifican en la gráfica siguiente:

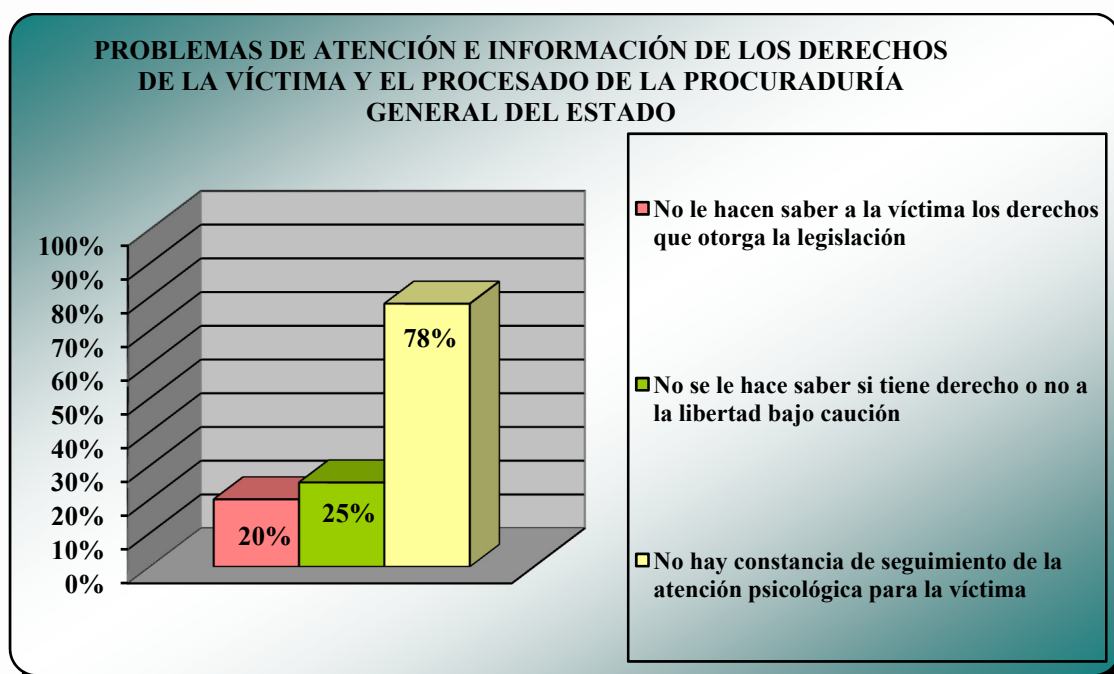


En la gráfica anterior se reflejan las deficiencias en cuanto a la reparación del daño, de los cuales el 100% representa el problema de no señalar los bienes a embargar para garantizar el pago de la reparación del daño; sin que se considere lo ordenado por el Código Procesal Penal de AF. El 83% de los problemas, resulta la falta de solicitud de la condena a la reparación del daño, la falta de argumentaciones para la misma, sin tomar en cuenta lo ordenado por el Código Procesal Penal. El 25% representa la solicitud de la reparación del daño cuando éste ya ha sido reparado, ya sea por devolución o sustitución, en 71% de los casos no presentan pruebas que sirvan para la condena a la

reparación del daño, otro 100% de los expedientes no fijan un monto concreto de la reparación del daño.

De lo anterior podemos decir que dichos errores traen como consecuencia la violación a las garantías procesales de las víctimas/ofendidos/os, ya que el hecho de no darle la especial atención a la acción de la reparación del daño y perjuicios, además de un debido seguimiento desde el inicio de la averiguación previa, en las subsecuentes etapas del proceso puede ocurrir por igual problemas de error u omisión y ser repetidos ahora por parte del juzgador/a ya que en esta etapa procesal y al no contar con elementos suficientes en torno al caso puede llegar a resolver de forma negativa en la sentencia, es decir absolver al procesado de esta obligación y por lo tanto que no se llegue a resarcir e indemnizar a la víctima de los daños o perjuicios causados por la comisión del delito.

Los problemas de la atención e información de los derechos que otorga la constitución y la legislación local se describirán en la siguiente gráfica:



Los problemas que se muestran en la gráfica que antecede tienen que ver con los derechos y garantías que otorga la Constitución y la legislación local tanto a la víctima como al procesado. El 20% de las deficiencias en esta categoría es el que no le hacen saber a la víctima la totalidad de los derechos que le otorga la Constitución Federal²² y la legislación local sin tomar en cuenta lo ordenado por el Código Procesal Penal. El 25% de las deficiencias es que no se les hace saber a los inculcados si tienen o no derecho a

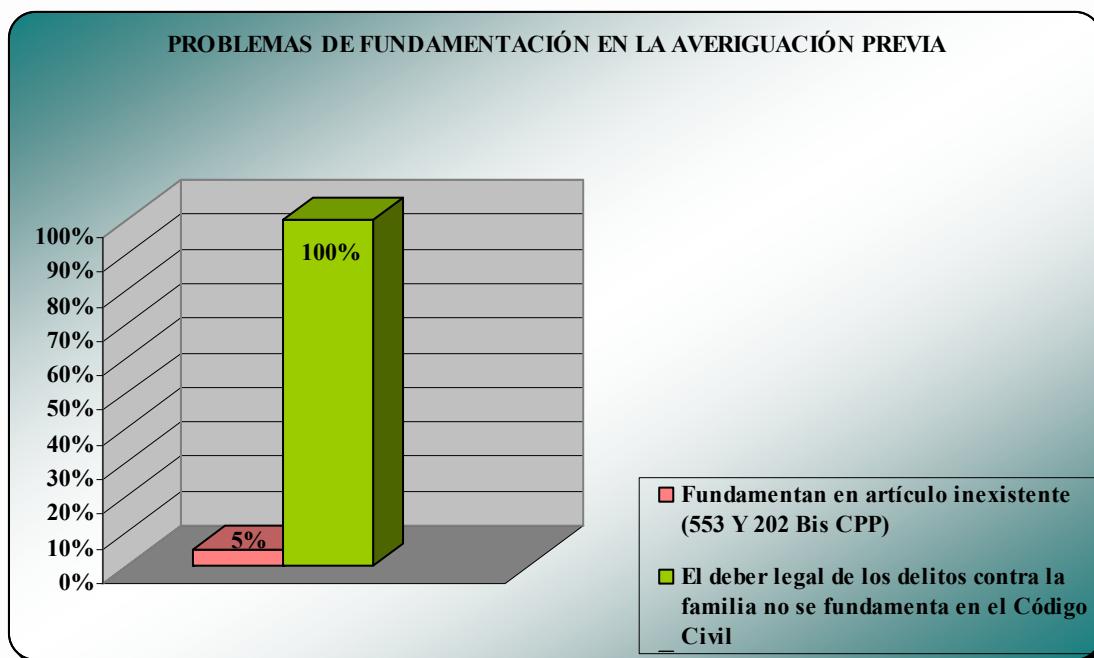
²² Artículo 20 Constitucional Apartado B

la libertad bajo caución, lo cual se contrapone directamente con lo señalado en el Artículo 20 constitucional. Asimismo en un 78% de los casos se observó que no existe un seguimiento al tratamiento de atención psicológica a la víctima.

Cabe subrayar que en una cuarta parte de los problemas de libertad bajo caución se refieren a que aún cuando el inculpado tiene derecho a la libertad bajo caución no se le hace saber ese derecho, siendo este uno de los fundamentales del procesado²³ ya que la ley permite la aplicación de esa medida cautelar.

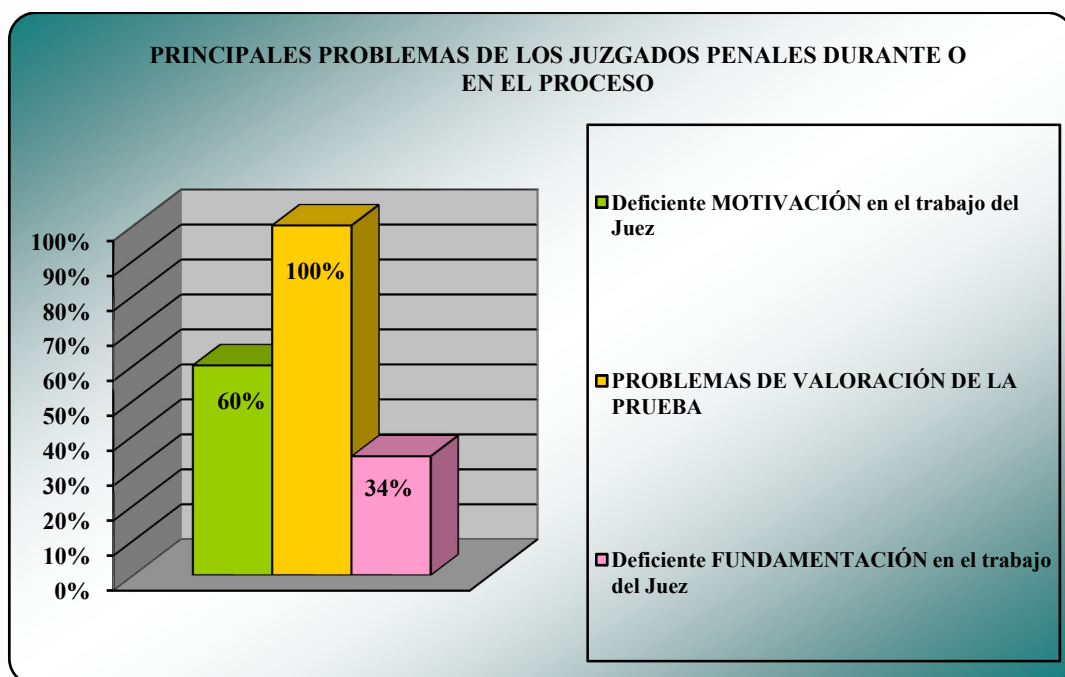
En la vía de los hechos y de manera considerable las referidas autoridades no expresan explicaciones a la víctima/ofendida/o relativas al desarrollo de las distintas diligencias del proceso, o bien en ocasiones el o la MP, Jueza/ez, solo levanta constancia de su comparecencia donde asientan sus datos más generales, y de manera somera asienta en acta el respectivo artículo, pero no le explican o informan en qué consisten y los alcances que tiene el hecho de que haga valer las garantías consignadas a su favor en los distintos ordenamientos jurídicos. Respecto al seguimiento del apoyo psicológico al inicio del mismo se promueve, pero en etapas posteriores prevalece poco perfil e interés para que la víctima/ofendida/o continúe con dicho tratamiento, por lo que no se cumple en forma completa dicha garantía.

Algunos de los problemas de fundamentación que tienen los fiscales del ministerio público durante la Averiguación Previa y el Proceso se mostrarán más específicamente en la siguiente gráfica:



²³ Artículo 20 Constitucional Apartado A Fracción I

Como se observa en la gráfica una de las deficiencias principales en la averiguación previa, es el hecho de fundamentar en un artículo de la legislación, que es inexistente, este error representa el 5% de los problemas de fundamentación por parte de fiscales del Ministerio Público, otro de los problemas frecuentes que representa el 100% de las deficiencias de fundamentación es que en el delito contra la familia específicamente el de incumplimiento de deberes alimentarios los fiscales no están fundamentando el deber legal que tiene el alimentista en el Código Civil ya que es ahí donde surge el deber legal de alimentos.

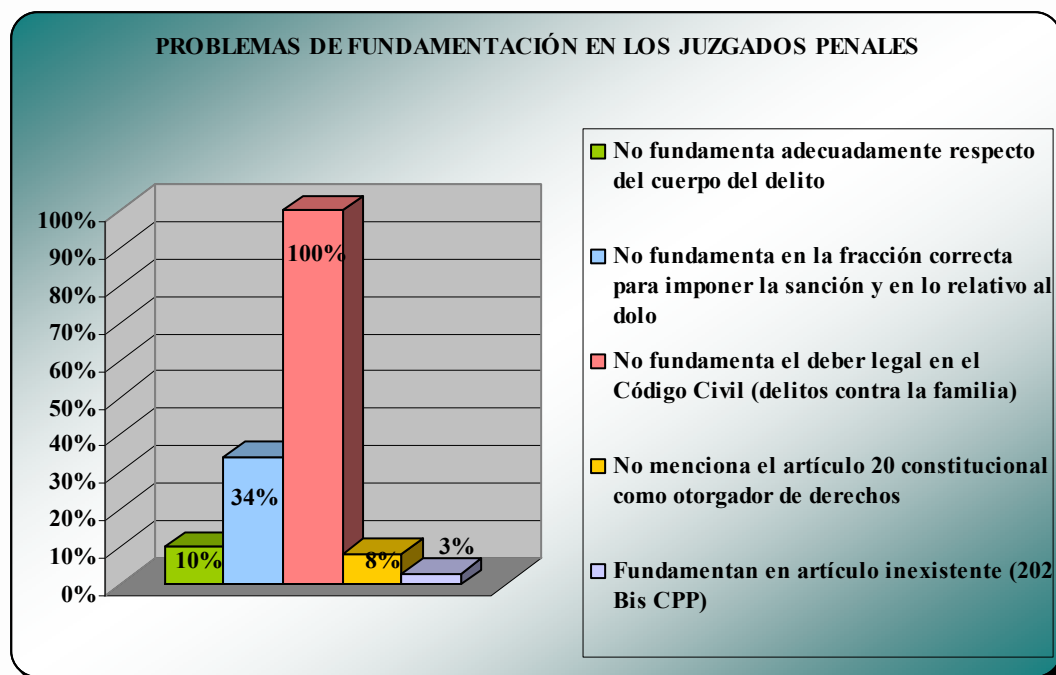


La anterior gráfica muestra los principales problemas que se presentan en las actuaciones y resoluciones de las/os Jueces y personal del Juzgado según su frecuencia. De lo anterior se desprende que en 60% de los expedientes se presentan problemas de motivación, como no dar argumentación de la valoración otorgada a las pruebas, no señalar el bien jurídico tutelado, otro de los problemas tiene que ver con la valoración de las pruebas lo cual sucede en 100% de los casos que integraban la muestra de análisis; por último, aunque en porcentaje menor se encuentran casos de una deficiente fundamentación, lo cual significa la correcta aplicaciones de las normas legales a un asunto específico, esto pasa en 34% de los expedientes analizados, en los que se puede apreciar por ejemplo que no se fundamenta de manera correcta en la fracción correspondiente al dolo o culpa en su caso y en el artículo relativo a la imposición de sanciones.

A continuación se presentarán las gráficas que de manera detallada muestran y desglosan las áreas comentadas en los párrafos anteriores. La gráfica que se presenta a

continuación muestra los problemas de motivación a los que nos hemos referido con anterioridad.

Aunque en menor porcentaje se encuentra lo relativo a los problemas de fundamentación, los cuales se encuentran representados en la siguiente gráfica:



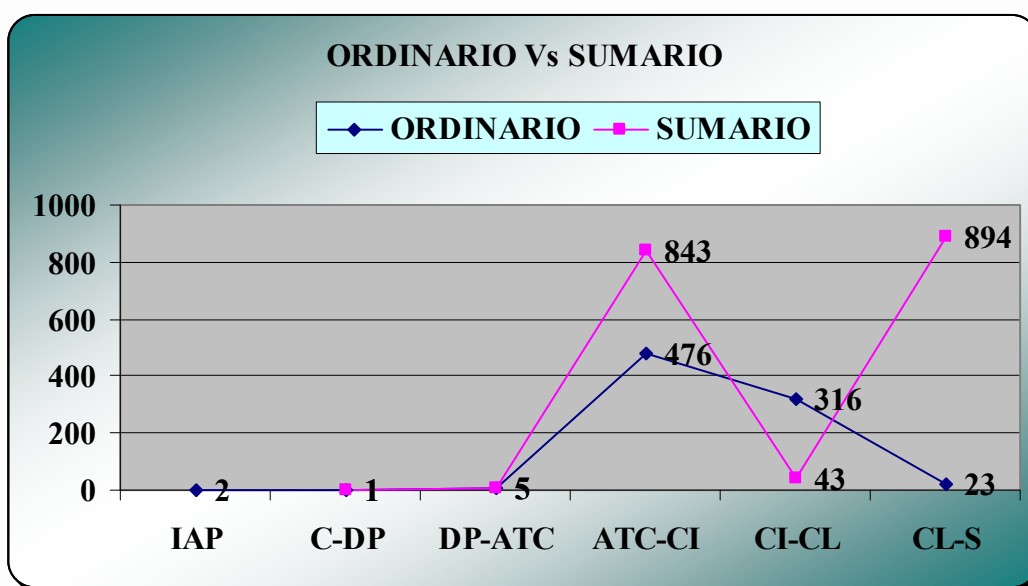
Como ya se ha apuntado con anterioridad los problemas de fundamentación, aunque se presentan con menor frecuencia, no debe restárseles importancia puesto que es innegable que las autoridades están obligadas por el Artículo 16 constitucional a fundar sus mandamientos y es por esto que se tienen una gran importancia para el presente estudio.

De esta manera la gráfica nos muestra que 10% de los problemas se refieren a la inadecuada fundamentación que hacen respecto al cuerpo del delito, es decir no hay conexión entre la hipótesis normativa y la descripción de los hechos, en otras palabras la conducta no se adecua al tipo penal; no se toma en cuenta lo previsto en el Código Procesal Penal. 34% de las deficiencias en este rubro se refieren a no fundamentar en la fracción correcta la imposición de sanciones, es decir no es correcta la adecuación de los hechos a los agravantes del delito para efectos de imponer la pena y para señalar el dolo o culpa según sea el caso en la fundamentación; y pasa por alto lo previsto en el Código Procesal Penal.

Otra deficiencia es la que se desprende de no fundamentar el deber legal que tiene el alimentista con sus acreedores alimentarios el cual surge a la vida en la legislación civil²⁴ deficiencia que constituye 100% de las deficiencias; por otro lado otro 8% de los problemas tiene que ver con no señalar el Artículo 20 de la Constitución Federal en el momento de mencionar los derechos al procesado, es decir si bien es cierto que se informa al procesado sobre algunos derecho que le otorga la legislación, también lo es que se indica que estos derechos están consagrado en el Artículo 20 de la Carta Magna; de igual manera 3% de las deficiencias, se refieren a que fundamentan en un Artículo inexistente en la legislación local.

TIEMPOS PROCESALES

El presente capítulo pretende demostrar los problemas de cumplimiento de los términos marcados por la ley procesal penal. Es decir, las gráficas que se presentan más adelante reflejan los tiempos reales que pasan entre las distintas etapas procesales y se obtienen a través de una matriz aplicada durante el análisis de los expedientes. Cabe subrayar que los datos que se explicarán en los siguientes párrafos son elementos de análisis objetivo, es decir se derivan de datos estadísticos. Así también, este ejercicio permite identificar el o los momentos en los que el Sistema de Justicia Penal tiene problemas para procesar las causas y en consecuencia determinar medidas para disminuir la brecha entre la ley en teoría y la ley en práctica.



JUICIO EN PRIMERA INSTANCIA

En la gráfica que antecede podemos apreciar que entre el inicio de la averiguación previa y la consignación en los procesos instruidos por la vía ordinaria transcurren en

²⁴ Op. Cit. Nota 6

promedio 2 días, mientras que en los tramitados por la vía sumaria 2 días; lo anterior se debe a que los delitos llevados en la vía sumaria alcanzan libertad bajo caución.

Entre la consignación y la declaración preparatoria se tardan en los juicios tramitados por la vía ordinaria y sumaria, en promedio un día, esto principalmente porque el sujeto activo en algunas ocasiones logra el beneficio de la libertad bajo caución; entre la declaración preparatoria y el auto de término constitucional en los juicios llevados por la vía ordinaria y sumaria pasan 5 días, tiempo que está contemplado dentro de la legislación penal; entre el auto de término constitucional y el cierre de instrucción se tarda 476 días en el ordinario, mientras que en el sumario transcurren en promedio, 843 días hasta la celebración de la audiencia de Ley.

En los juicios llevados por la vía ordinaria, entre el cierre de instrucción y la formulación de las conclusiones pasan en promedio 361 días, y para dictar la sentencia; entre la formulación de las conclusiones y la emisión de esta hay un lapso de 23 días en aquellos casos llevados por la vía ordinaria y en los sumarios 43.

JUICIOS ORDINARIOS

Juzgado	IAP-C	C-DP	DP-ATC	ATC-CI	CI-CL	CL-S	IA-RA	RA-RsA	Total
AF-1	2	1	5	476	361	23	155	0	1023
AF-2	84	269	2	442	156	28	131	0	1112

Se observa pues que para los juicios ordinarios, tomando en cuenta el recurso de apelación resulta que el procedimiento en el Juzgado AF-1 de lo penal tarda en promedio 1023 días naturales, mientras que en el Juzgado AF-2 el tiempo promedio es de 1112, siendo en ambos casos superior al año que ordena la Constitución Federal que debe durar este proceso.

JUICIOS SUMARIOS

Juzgado	IAP-C	C-DP	DP-ATC	ATC-AUD.SUM CL	AUD.SUM-CL-S	Total
AF-1	2	1	5	843	43	894
AF-2	2	2	3	333	28	368

Para el caso de los juicios sumarios resulta que el procedimiento en el juzgado AF-1 se tarda en promedio 894 días naturales, y en el Juzgado AF-2 368 días.

ACIERTOS EN EL DESEMPEÑO

Como se ha señalado en los párrafos anteriores el objetivo del proyecto es el realizar un estudio diagnóstico del sistema de procuración e impartición de justicia a través del análisis de las actuaciones y resoluciones emitidas por parte de la Procuraduría, así como del Poder Judicial. Debido a que el presente estudio busca determinar la realidad

de procuración e impartición de justicia en AF, es necesario identificar no solamente las deficiencias del sistema, sino también los aciertos lo que permite tanto fortalecer como disseminar las mejores prácticas implementadas en el Estado.

Para tal efecto, el estudio abarca todo el proceso penal con el principal enfoque sobre las actuaciones de los Fiscales del Ministerio Público y los jueces.

Los aciertos que se identificaron se dividen en cuatro grupos referentes a; la competencia, referentes a las formalidades del proceso, la fundamentación de las actuaciones y determinaciones para los inculcados y las garantías de las víctimas u ofendidos.

El estudio arroja aciertos constantes durante el proceso; tanto en la Averiguación Previa como en parte de la Instrucción Judicial.

1. Aciertos de Competencia:

- Fijar competencia en la orden de aprehensión
- Fijar competencia en el auto de término constitucional

2. Aciertos de Formalidades:

- Consta en autos que solicitó o no la duplicación del término constitucional
- Consta en autos el día, mes y hora en que se practicaron las actuaciones
- Consta en autos que las fechas y cantidades fueron escritas con letra y cifras
- Consta en autos que todas las actuaciones terminaron con una línea trazada debajo del texto, antes de las firmas
- Consta en autos que todas las fojas del expediente fueron entreselladas
- Consta en autos que todas las fojas del expedientes fueron Rubricadas
- Consta en autos el oficio a la autoridad electoral competente para efecto de la suspensión de los derechos políticos

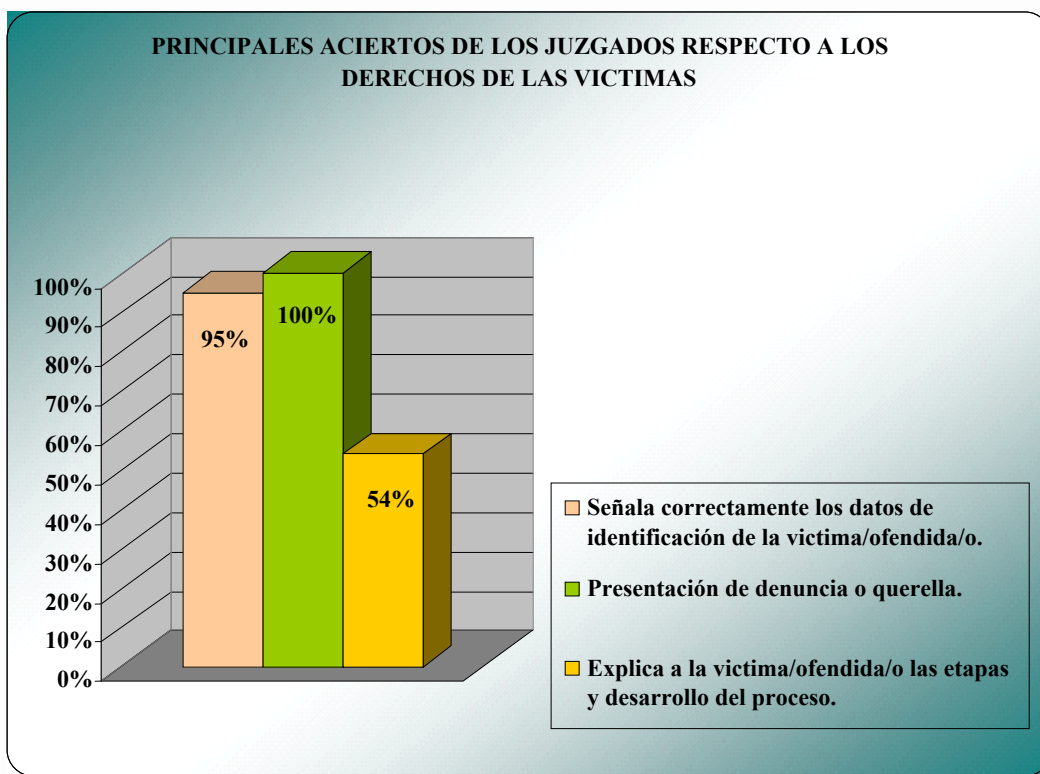
3. Aciertos de información al inculcado sobre los derechos:

- En el auto de término constitucional el juez/a entra al estudio de las causas de exclusión o causas excluyentes de incriminación.
- Calificación Legal de la detención ministerial.

4. Aciertos sobre las garantías de la víctima:

- Datos de identificación de la Víctima/Ofendido Artículo 20, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Explicación a la víctima las etapas y desarrollo del procedimiento penal Artículo 20, Fracción I de la Carta Magna. Recepción de Denuncia o Querrela por parte de la Víctima/ Ofendido Art 20 Fracción I, de la Constitución Federal.

La siguiente gráfica se refiere a la buena aplicación de la ley en cuanto al respeto de los derechos de víctima/ofendido.



En la gráfica anterior puede observarse que en 95 % de los expedientes resueltos en los Juzgados Penales, el o la Fiscal del Ministerio Público señala en forma correcta los datos de identificación de la víctima/ofendida/o. En un 100% se encontró que en los casos en que debería presentarse querella o denuncia según corresponda, este requisito fue totalmente cubierto.

Así también en un 54% de los casos el Fiscal del Ministerio Público hace constar que le fue explicado a la víctima/ofendida/o las etapas y desarrollo del proceso. Cabe señalar que lo último es un elemento indispensable de la transparencia procesal, ya que permite a una persona que busca la justicia tener un conocimiento de cuáles son los pasos que deben seguirse para lograr la misma.

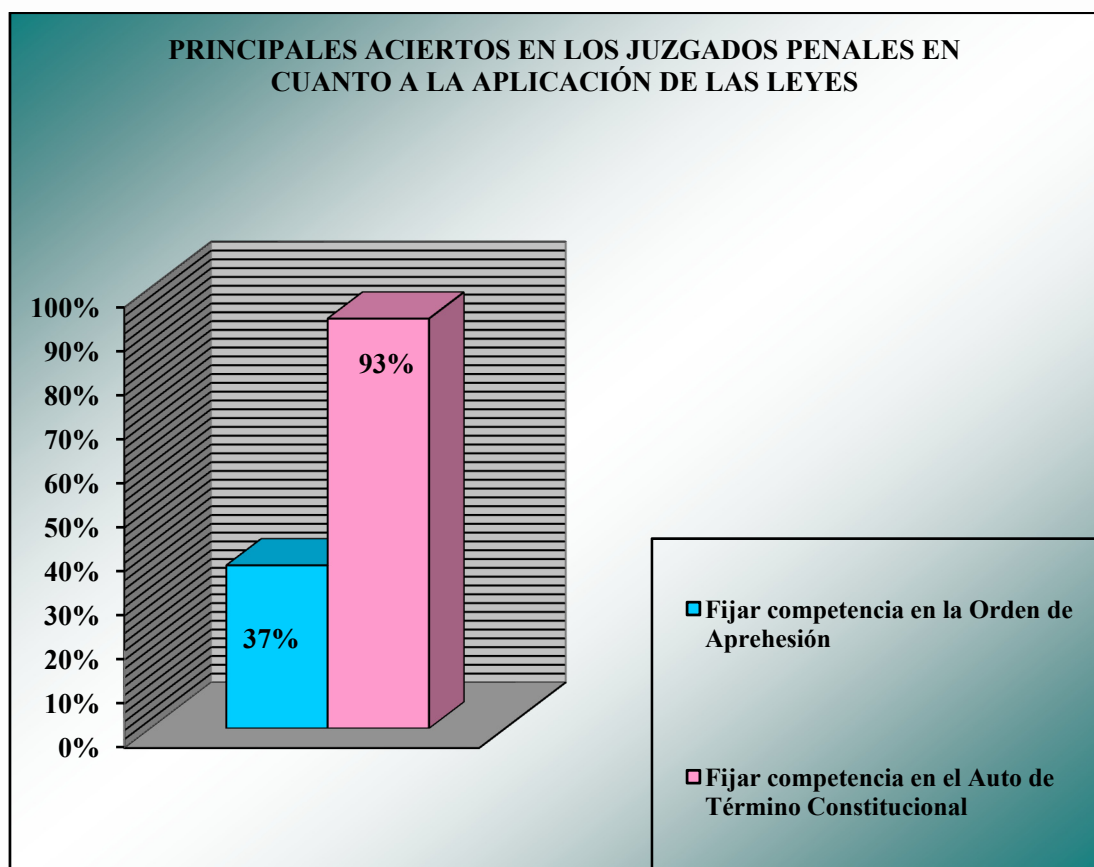
Es de señalarse que los tipos de aciertos que se encontraron en los expedientes a través del análisis son idénticos en todos los Juzgados.

Asimismo en el 100% de los casos se identificó que los datos de la víctima/ofendido se señalan sin error alguno, al igual en un 100% de los casos que requerían denuncia o querella contenían ese documento.

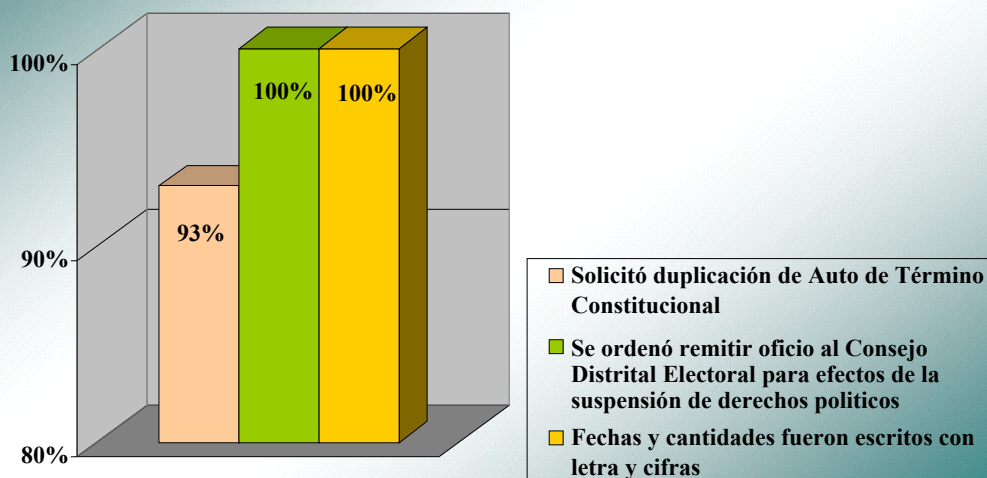
Ahora bien como se ha señalado en la introducción del presente capítulo, el análisis realizado abarcó no solamente el trabajo de la Procuraduría; sino también el de las y los Jueces y personal de los Juzgados Penales. Por tanto, las siguientes gráficas reflejan los aciertos en el desempeño de los Juzgados Penales y Mixtos respectivamente.

En cuanto a la aplicación correcta de las leyes penales en los Juzgados podemos señalar lo siguiente:

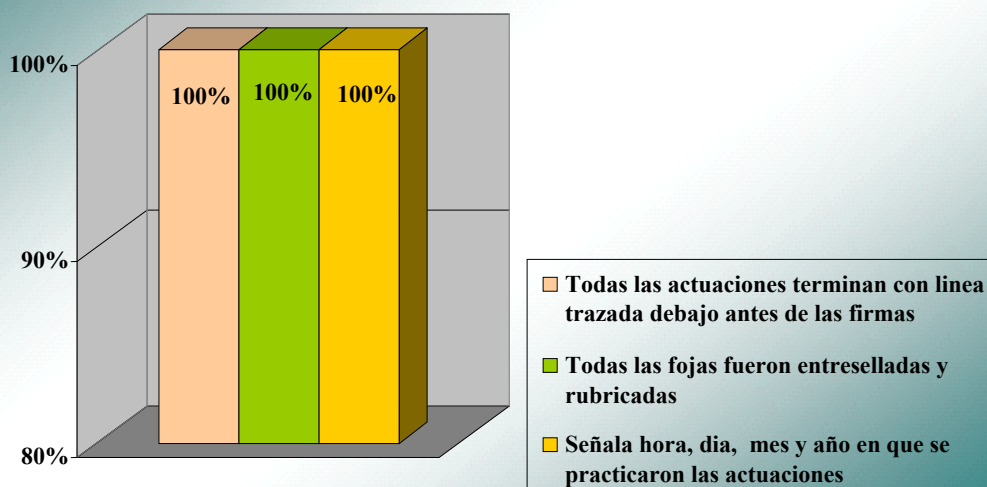
ACIERTOS EN LAS FORMALIDADES DEL PROCESO PENAL



PRINCIPALES ACIERTOS DE LOS JUZGADOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEYES



PRINCIPALES ACIERTOS DE LOS JUZGADOS RESPECTO A LA
APLICACIÓN DE LA LEYES (Cont)



ACIERTOS DEL JUZGADO PENAL EN INFORMAR AL INCULPADO SUS DERECHOS

